

Bogotá D.C., 29 de abril de 2025.

Doctor

**JAIME LUIS BERDUGO PÉREZ**

Viceministro General del Interior

Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la  
Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT)

[secretariaciprat@mininterior.gov.co](mailto:secretariaciprat@mininterior.gov.co)

Carrera 8 No 12B-31

Bogotá D.C.

Referencia: Informe de Seguimiento N° 009-2025, a la Alerta Temprana N° 027-2021 para los municipios Condoto y Nóvita, en el departamento Chocó.

Respetado Señor Viceministro:

En el marco de las funciones de la Defensoría del Pueblo, remito el presente Informe de Seguimiento a la Alerta Temprana No. 027-21 para los municipios de Condoto y Nóvita del departamento del Chocó. Lo anterior conforme lo establecen los artículos 4 y 14 del Decreto 2124 de 2017. Conviene señalar que, conforme el art. 4 del Decreto 2124 de 2017, el seguimiento a las Alertas Tempranas comprende todas aquellas “(...) actividades tendientes a examinar el efecto de las medidas adoptadas y la evolución del riesgo advertido (...)”.

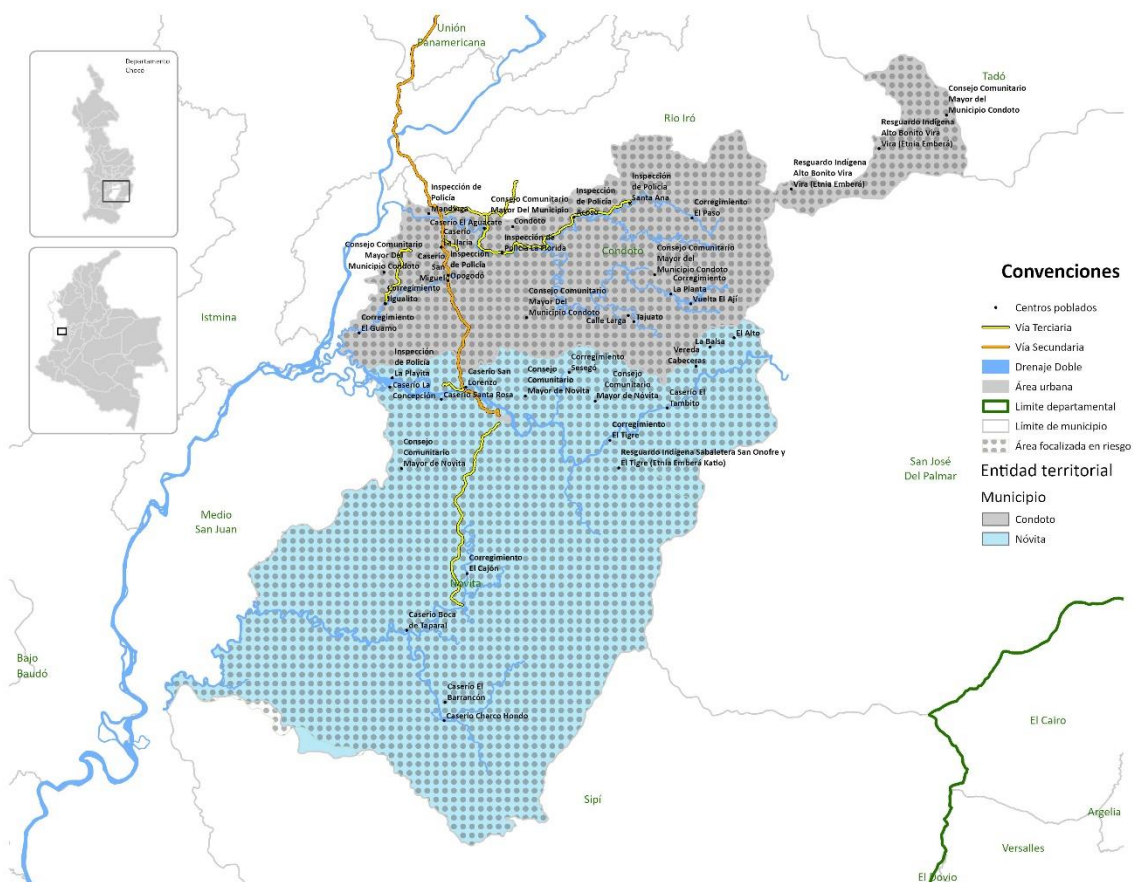
En consecuencia, el presente Informe dará cuenta, en primera instancia, de un balance de la evolución del contexto de amenaza con posterioridad a la emisión de la Alerta Temprana, destacando las principales dinámicas de violencia emprendidas por los actores armados fuente del riesgo y sus impactos sobre los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad de la población civil y el Derecho Internacional Humanitario (DIH) en los municipios de Condoto y Nóvita, considerando que la situación de riesgo advertida se ha exacerbado.

Acto seguido, se analizará la gestión institucional del riesgo advertido por medio de la Alerta. En esa medida se valorará el nivel de cumplimiento estatal a las recomendaciones emitidas en la AT a la luz de las obligaciones erga omnes de respeto y garantía de los Derechos Humanos y del deber de respuesta rápida consagrado en el Decreto 2124 de 2017. La respuesta institucional se valorará a la luz de las categorías de coordinación oportuna, y eficacia. Estas tienen su origen en la jurisprudencia constitucional, incluyendo los Autos No. 178 de 2005 y No. 218 de 2006, y particularmente el Auto de Seguimiento No. 008 de 2009 a la Sentencia T-025 de 2004, en el que se resalta la necesidad de “una respuesta estatal oportuna, coordinada y efectiva ante los informes de riesgo señalados por la Defensoría del Pueblo”.

Finalmente, los resultados de la gestión institucional pueden enmarcarse en cualquiera de los siguientes niveles: incumplimiento, cumplimiento bajo, cumplimiento medio, cumplimiento alto y pleno cumplimiento. Para efectos del presente Informe de Seguimiento, se valoró un **cumplimiento bajo en la gestión institucional**.

Cabe subrayar que factores como la capacidad de prevención y respuesta de las instituciones son fundamentales para asegurar el cumplimiento de las obligaciones internacionales suscritas por el Estado colombiano y que, en dicho sentido, las recomendaciones emitidas por la Defensoría del Pueblo en las Alertas Tempranas tienen como fin último generar impactos estructurales en materia de prevención, protección y no repetición de violaciones de derechos humanos, y, como fines inmediatos, la disuasión, mitigación o superación del riesgo advertido.

### Localización geográfica del riesgo



## 1. Evolución del Riesgo

Tras el escenario de riesgo advertido por el sistema de Alertas Tempranas - SAT de la Defensoría del Pueblo, se valora la emisión del informe de seguimiento en clave de la evolución del escenario de riesgo teniendo en cuenta tres aspectos: 1. Consumación del escenario de riesgo. 2. Persistencia del escenario de riesgo y repercusiones de gran impacto y 3. Exacerbación del riesgo por escenario de avanzada y disputa territorial de grupos armados ilegales, los cuales se analizan por municipios.

### A. Intereses en el territorio de Condoto y Nóvita

En los municipios de Nóvita y Condoto persisten intereses estratégicos. Por un lado, los relacionados con el control de economías lícitas e ilícitas: se mantiene el aprovechamiento ilegal de recursos naturales –especialmente la minería de oro y platino, así como los cultivos de uso ilícito– y, al mismo tiempo, se observa una creciente injerencia sobre proyectos de infraestructura vial, redes públicas de servicios como acueducto y alcantarillado, centros educativos y proyectos de conservación ambiental, como los Bonos de Carbono. En ambas modalidades se extorsiona a quienes participan en estas actividades, mediante el cobro de contribuciones económicas: en el caso del aprovechamiento de minerales, hasta el 10 % del producido; y en los proyectos de infraestructura, hasta el 10 % del valor total del proyecto a ejecutar.

La explotación ilegal de minerales, principalmente oro y platino, se sostiene en Condoto y en Nóvita ha incrementado entre la zona media y alta del río Tamaná, siendo una de las principales fuentes de financiación de los grupos armados ilegales con presencia en el territorio, lo que además incentiva el control poblacional.

Por otro lado, al interés por el control de economías, se suma la posición estratégica de estos municipios, que funcionan como corredores de movilidad clave entre el Chocó, el resto del Pacífico y los departamentos de Risaralda, Antioquia y Valle del Cauca. Específicamente, estos corredores conectan con los municipios de Río Iró, Tadó –vía interdepartamental–, y con San José del Palmar, Sipí y Litoral del San Juan, lo que facilita la conexión con el Valle del Cauca. Su ubicación los convierte hoy en día en focos de disputa territorial para el abastecimiento de alimentos, el tránsito de sustancias químicas para el procesamiento de coca, el desarrollo de otras actividades ilícitas y el repliegue de tropas, debido a su fácil conexión con los departamentos mencionados.

El control de este territorio, por su carácter estratégico, continúa enmarcado en la disputa entre el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y se ha agravado por dos procesos de expansión territorial del EGC, en zonas anteriormente dominadas por el ELN. El primero corresponde a un avance del EGC desde la parte baja y media del Tamaná hacia la parte alta, con la pretensión de lograr el dominio de San José del Palmar y una conexión con el Valle del Cauca por la parte norte; el segundo, a una disputa hacia la zona sur, con el objetivo de controlar municipios como Sipí, comunidades

del Medio San Juan e Istmina, así como el municipio de Litoral del San Juan, para conquistar el corredor que desde la parte sur del Chocó conecta con Buenaventura y otros lugares de interés en el departamento del Valle del Cauca.

Como resultado de esta disputa, los impactos sobre la población civil han sido sistemáticos y de gran escala. El escalonamiento del conflicto entre el ELN y el EGC ha generado hechos reiterados de victimización y revictimización, principalmente a través de desplazamientos forzados, confinamientos, amenazas, homicidios y restricciones a la movilidad. Estas afectaciones no solo comprometen derechos fundamentales individuales como la vida, la libertad y la integridad personal, sino que inciden de forma desproporcionada en derechos económicos, sociales y culturales, impactando la salud, la educación, la alimentación, la cultura, la identidad y las formas de vida de las comunidades étnicas afrocolombianas e indígenas que habitan la región.

#### B. Dinámica del municipio de Nóvita

En relación con el control de economías, en Nóvita existe presencia de cultivos de uso ilícito. Aunque la población señala una baja en la producción entre el año 2023 y 2024, por la disminución de precio en el mercado, esta actividad continúa siendo de interés para los grupos armados ilegales, principalmente para el ELN que tiene control en la parte alta de este territorio y de San José del Palmar donde se concentra mayoritariamente la producción de coca.

A su vez, en este municipio se han presentado afectaciones por confinamiento constante en la zona del Medio Tamaná, Alto Tamaná y zona Sur (Cajón y Torrá en límites con Sipí)<sup>1</sup>; se trata de un corredor que afecta tanto a Nóvita como al municipio de Sipí. En la cabecera municipal, se aprecia el accionar directo del EGC, que se dedica a la extorsión de comerciantes y sector transporte, al reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes (NNA) como campaneros y en otras actividades.

En Nóvita, con posterioridad a la emisión de la Alerta Temprana 027-21, se presentaron conductas vulneratorias de Derechos Humanos (DD.HH) e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), siendo las más recurrentes desplazamientos forzados, confinamientos, enfrentamientos con interposición de la población civil, contaminación del territorio con minas antipersonales, retenciones arbitrarias, amenazas, reclutamiento forzado, entre otras, las cuales derivaron en afectaciones individuales y colectivas, muchas de ellas ocurridas en el marco de enfrentamientos entre el ELN y el EGC; otras afectaciones se derivaron con ocasión de combates entre el ELN y el Ejército Nacional que podrían haber desconocido algunos principios del DIH. Las conductas vulneradoras más recurrentes y con mayor impacto sobre la población civil han sido homicidios en persona protegida, lesiones personales, afectación de bienes civiles, accidentes con Minas Antipersonal y/o artefactos explosivos, desplazamientos forzados, confinamientos,

---

<sup>1</sup> Comunicación dirigida a la CIPRAT, Ministerio del Interior - Oficio de consumación radicado número 20220040400332071.

amenazas, restricciones a la movilidad, paros armados reiterativos, que han lesionado bienes tutelados como la vida, libertad, integridad y seguridad personal<sup>2</sup>.

Según la Personería municipal de Nóvita, entre 2022 y 2024, se declararon 252 casos de desplazamiento forzado de carácter individual; 170 se habrían registrado en el año 2022, 58 en el 2023 y 24 en el 2024, con fecha de corte al 30 de noviembre de 2024. Los lugares de expulsión las comunidades de El Tigre, Aguaclearita, Tambito, Chorro, Cocotea, Quebrada Larga, Sesego, Juntas del Tamaná, La Puente y Sed de Cristo, siendo afectadas, en primer año, la población de la zona media del río Tamaná y algunas de la parte alta. En la vigencia de 2023, se registró mayor repercusión en las comunidades que están en la parte sur del municipio en límites con el municipio de Sipí, sosteniéndose el área de afectación en el 2024.

En este sentido, la personería de Nóvita dio cuenta de que, durante el año 2023, se presentaron cinco eventos de desplazamientos masivos que afectaron a 246 familias y 603 personas de Torrá, Cajón, Santa Bárbara, San José que afectaron a personas afrocolombianas e indígenas de la zona sur, por amenazas del ELN, para frenar la avanzada y control del territorio por parte del EGC. En el 2024, debido a combate entre el ELN y Ejército Nacional se presentó el desplazamiento masivo de 23 familias y 47 personas afros e indígenas de la comunidad Brazo de Agua Sucia.

Los últimos eventos de desplazamiento masivo tuvieron lugar en fecha 5 y 6 de febrero de 2025 en donde 50 familias y más de 100 personas se desplazaron por la presencia del ELN y EGC en la comunidad de Sesego y por combates que se registraron desde el día 6 al 7 de febrero<sup>3</sup>. Lo anterior, generó un estado de zozobra en la población y riesgos que se extendieron a las comunidades afrocolombianas vecinas de Agua Clara, Agua Clarita, El Tigre y al resguardo indígena EL Tigre Montería localizado en la zona del Medio Tamaná<sup>4</sup>. Adicionalmente los hechos presentados configuran nuevos eventos de confinamiento y la posibilidad que aumenten los casos de desplazamientos masivos.

Continuando con las afectaciones más recurrentes, en el año 2022 se registraron seis confinamientos que afectaron 197 familias y 529 personas de las comunidades étnicas de Tambito, Quebrada Larga, La Puente, Aguaclearita, Sed de Cristo y Alto Piedramoler, localizadas en la zona del Medio Tamaná del municipio. En el 2023 se generó el confinamiento de la comunidad indígena Sabaletera, y de las comunidades afrodescendientes El Tigre y Juntas de Tamaná, afectando a 183 familias y 546 personas. En el 2024 se presentaron varios confinamientos en la zona sur de Nóvita a raíz de los diferentes paros armados decretados por el ELN afectando principalmente a los pobladores de San José, Santa Bárbara, Cajón y Torrá en límites con el municipio de Sipí y río San

<sup>2</sup> Comunicación dirigida a la CIPRAT, Ministerio del Interior - Oficio de consumación radicados números 20220040402329741 y 2022004040086830

<sup>3</sup> Ver, por ejemplo: Comunicación dirigida a la CIPRAT, Ministerio del Interior - Oficio de consumación radicado número 202500404000524821 del 6 de febrero de 2025.

<sup>4</sup> Ver, por ejemplo: Comunicación dirigida a la CIPRAT, Ministerio del Interior - Oficio de consumación radicado número 202500404000368701 del 29 de enero de 2025.

Juan, en el contexto de acciones violentas originadas por la disputa territorial entre el ELN y EGC.

Por último, en el 2025, a raíz de escenario de disputa territorial y probabilidad de avanzada de EGC a otras áreas estratégicas del municipio, se han reportado confinamientos en las comunidades afrocolombianas de Sesego, Agua Clara, Agua Clarita, El Tigre y en la comunidad indígena del Tigre Montería. De igual manera, se informó la situación de confinamiento en las comunidades del Sur del río Tamaná - Pindaza, Santa Rosa y en cercanías a desembocadura al Medio San Juan donde se supone el EGC están consolidando una base para romper el corredor y obtener todo el control de la subregión del San Juan, con la finalidad de lograr un estatus o reconocimiento político.

Los eventos de confinamiento tendieron a aumentar por presencia de grupos armados ilegales en los territorios, por confrontaciones, paros armados impuestos, pero también y con alto impacto, por la contaminación del territorio con Minas Antipersonal (MAP), Municiones Sin Explosionar (MUSE) y trampas explosivas. En este sentido, el territorio de Nóvita es uno de los municipios del Chocó con mayor afectación con esta práctica de guerra, la cual ha causado la muerte de población civil y lesiones personales graves. A finales de diciembre del año 2023, por ejemplo, una mujer indígena y su hija fueron víctimas de accidente con MAP cuando se dedicaban a la recolección de productos agrícolas, la madre falleció de manera inmediata y la menor de edad resultó con graves lesiones personales.

Esta situación también ha impactado a militares que han resultado heridos con este tipo de armas. Para las comunidades, la contaminación del territorio con MAP afecta y agrava su subsistencia y supervivencia, pues no se pueden movilizar libremente por sus territorios y tampoco dedicarse tranquilamente al ejercicio de sus prácticas tradicionales de producción como la agricultura, caza y pesca, ya que la instalación de estos artefactos de gran impacto, derivan incluso en la pérdida de producción, porque inclusive algunos semovientes como vacas y cerdos caen en las minas antipersonales. Según lo expresado por algunos líderes del territorio, esta situación también afecta sus bienes comunes, culturales y espirituales como los cementerios que en su mayoría están minados.

El último evento de afectación por MAP, se registró el 6 de febrero de 2025 en las horas de la mañana, cuando un miembro de EGC cayó en un campo minado dentro del territorio Colectivo de Sesego, Consejo Comunitario de Nóvita; distintas versiones han señalado que el ELN estaría aumentando el uso de trampas explosivas y/o minas antipersonales para frenar la avanzada del EGC.

Además, es pertinente señalar la ocurrencia de homicidios en el municipio, así como la disposición frecuente de cadáveres en zona limítrofe con Condoto de fluida circulación, lo cual, se presume tiene que ver con bajas en combates por confrontaciones entre el ELN y EGC en la zona del río Cajón y Sipí. La pretensión es que se realice identificación por familiares, una vez se reporte a la autoridad competente del hallazgo. No obstante, bajo esta modalidad, también se han reportado homicidios de civiles.



### C. Dinámica del municipio de Condoto

En relación con el control territorial en Condoto, algunos estudiantes y transportadores (mototaxistas), son utilizados para el tráfico y transporte de armas y estupefacientes, práctica que ha ido en aumento. En el mes de abril de 2024, este gremio de mototaxistas fue citado a la comunidad de Opogodó, en donde se les exigió por parte del EGC que subieran \$1.000 pesos al cobro de la tarifa; no obstante, también han recibido la invitación de vincularse al servicio de los grupos armados ilegales que hacen presencia en la zona, y los conductores que se han negado, han sido obligados a desplazarse individualmente, según información obtenida en visita al territorio.

En Condoto se observa el accionar preponderante del EGC, sobre todo en la zona urbana y comunidades vecinas carreteables. De igual manera, hace presencia el ELN en zonas más dispersas del Alto Condoto como río Tajuato que limita con Nóvita y Río Iró. Las prácticas más recurrentes tienen que ver con control poblacional, territorial, regulación de la vida civil, extorsión, control a mototaxistas y cobro de exacciones económicas o impuestos de guerra y la utilización de mototaxistas para transportar insumos de la organización y material de guerra.

La Personería Municipal de Condoto refirió que, desde el año 2022 hasta noviembre del año 2024, se tomaron declaraciones por los siguientes hechos victimizantes: en el año 2022 se tomaron 37 declaraciones, 35 corresponden a desplazamiento forzado y dos a homicidio. Por otra parte, para el año 2023 se evidenció un recrudecimiento del conflicto armado; se recibieron 232 declaraciones, evidenciándose dos por homicidio y 230 por desplazamiento forzado. También informa la Personería que solo por hechos ocurridos en el año 2024, con fecha de corte al 30 de noviembre, se han tomado 190 declaraciones por desplazamientos forzados individuales de población proveniente de Nóvita, Medio San Juan y Sipí<sup>5</sup>.

En la misma medida, entre el 19 al 26 de febrero del año 2023, fueron hallados cuatro cuerpos sin vida con señales de muerte violenta en la vía que conduce del municipio de Condoto hacia el municipio de Istmina, lo cual ha permitido evidenciar un patrón de asesinatos selectivos por parte de los grupos armados que ha generado una sensación de zozobra y temor colectivo en la comunidad. Sumado a lo anterior, se han aumentado las fachadas de establecimientos del comercio y viviendas del municipio de Condoto vandalizadas y pintadas con las siglas del grupo. Dichas acciones se concatenan con otras acciones empleadas por el EGC en Condoto para intervenir en el territorio tales como acciones coercitivas que interfieren en las relaciones de los habitantes imponiendo multas y sanciones por conflictos de vecinos o amenazas a la misma comunidad, acciones que el

---

<sup>5</sup> Comunicación dirigida a la CIPRAT, Ministerio del Interior - Oficio de consumación radicado número 2022004040507150

año anterior tenían mayor ocurrencia en el corregimiento de Opogodó, lugar equidistante entre el municipio de Nóvita y Condoto<sup>6</sup>.

Actualmente persisten las sanciones y citaciones a reuniones obligatorias, tanto en el casco urbano del municipio de Condoto, como en el corregimiento de Jigualito, corregimiento que limita con el municipio de Medio San Juan. Esto evidencia un control del grupo armado EGC por las vías que comunican al municipio de Condoto con los municipios vecinos de Nóvita y Medio San Juan respectivamente.

Según lo planteado por la Personería municipal se registra un aumento de la dinámica del conflicto armado dentro del municipio; lo anterior, guarda relación con la dinámica de violencia de los municipios de Medio San Juan, Sipí y Nóvita, que se extiende al municipio de Condoto y lo convierte, además, en gran receptor de población desplazadas.

D. Conductas vulneratorias de los DD.HH. y/o infracciones al DIH:

- *Repercusiones contra el ejercicio del liderazgo comunitario*

El fortalecimiento comunitario en cuanto a capacidades sociales, se ve reducido y sigue constituyendo un factor de vulnerabilidad por los conflictos interétnicos, rupturas de canales de comunicación existente entre la Junta del Consejo Comunitario Mayor - COCOMACAIRO- y los Consejos Comunitarios menores de Condoto e Iró, situaciones que son muy similares a lo que ocurre en el municipio de Nóvita con el Consejo Comunitario Mayor - COCOMAN.

No obstante, el contexto en Nóvita reviste especial gravedad porque se han señalado a algunos líderes comunitarios de estar relacionados con grupos armados ilegales, tanto con ELN como con el EGC, lo que ha intensificado la situación de riesgo, y la afectación de derechos fundamentales, al ser sujetos de amenaza, objetivos de guerra y de otro tipo de agresiones que han derivado en desplazamiento forzado de liderazgos y sus núcleos familiares.

Algunos liderazgos del Consejo Comunitario Mayor y de los Consejos Locales han manifestado que han sido convocados de manera obligatoria a reuniones por parte de los grupos armados organizados que hacen presencia en el territorio. Esta situación genera una alta preocupación, ya que, al ser forzados a asistir, ubica a las personas líderes en el centro de la disputa territorial y del control poblacional. Y posteriormente, cuando otro grupo irrumpe en la zona, las personas líderes son fácilmente señaladas como colaboradores o informantes del grupo anterior, sin que se tenga en cuenta que su asistencia fue bajo presión. Esta dinámica los convierte en blanco directo de amenazas, poniendo en riesgo su vida e integridad.

---

<sup>6</sup> Comunicación dirigida a la CIPRAT, Ministerio del Interior - Oficio de consumación radicados números 20230040400705031, 20230040402082721



Por ejemplo, en la zona rural de Condoto, los liderazgos comunitarios han sido convocados a reuniones forzadas e instados, por parte del ELN, a involucrar a toda la población civil. Además, han sido citados de manera obligatoria en otras comunidades o en puntos de municipios vecinos, como Río Iró. En estos encuentros, se les informa sobre los castigos que se están aplicando contra miembros de la comunidad que no acatan las normas de conducta impuestas, y se emiten amenazas de muerte contra quienes no abandonen el territorio, lo que ha obligado a algunos civiles a desplazarse forzadamente de sus comunidades.

En zonas de accionar del EGC del municipio de Condoto, como por ejemplo la comunidad de Opogodó, se evidencian graves preocupaciones en materia de orden público, los líderes se sienten presionados, ya que cuando no están de acuerdo con las pretensiones del grupo ilegal, el EGC amenaza e intimida, además efectúa a diario presiones contra los líderes intentado tener vínculos y ser aceptados por la comunidad, para lo cual han recurrido a la entrega de regalos para los niños.

En Nóvita, los liderazgos también son convocados de manera recurrente a reuniones tanto por el ELN como por EGC. El ELN los ha presionado y citado en puntos de la zona alta de Nóvita, en límites con San José del Palmar, advirtiéndoles de los riesgos de enfrentamientos armados en sus comunidades si “permiten” la presencia de otro grupo armado ilegal en su comunidad. Por su parte, el EGC ha reaccionado de manera violenta cuando los convoca a reuniones y estos no asisten por medidas de restricción que impone el ELN para que no acudan al llamado a reunión de este grupo armado ilegal. Esta situación deja a la población civil, y especialmente a sus liderazgos, en medio de la confrontación entre los grupos armados, incrementando significativamente su nivel de exposición y riesgo.

Un ejemplo claro de represión y repercusión contra los liderazgos, se relaciona con renuncias que se han presentado por parte de líderes y lideresas de consejos comunitarios locales de la zona media de Nóvita como Santa Rosa y Pindaza. Estos han preferido renunciar a sus cargos de representación dentro de la junta directiva porque son hostigados, amenazados, intimidados, señalados y convocados a reuniones forzosas en repercusión de su autonomía y liderazgo comunitario. Esta situación de renuncias masivas, se puede extender a otras comunidades del territorio colectivo. Estos riesgos no son únicamente para las comunidades negras, pues también existen altas presiones contra los liderazgos de resguardos indígenas que han manifestado su intención de renunciar porque no quieren exponer más sus vidas y las de sus familias por sus roles en medio de la disputa que se cierne sobre sus territorios.

Lo descrito da cuenta de la alta probabilidad de ocurrencia de homicidios y desplazamientos contra lideresas y líderes comunitarios de Condoto y Nóvita quienes ejercen resistencia respecto a la presencia de grupos armados ilegales en sus territorios y a presiones por conflictos relacionados con la práctica de minería, los cultivos de uso ilícito o al desarrollo de proyectos de bonos de carbono, en medio de la disputa territorial.

La renuncia y el desplazamiento de líderes comunitarios como respuesta a estas amenazas representa una grave afectación al tejido social, debilita los procesos organizativos y deja a las comunidades en mayor situación de vulnerabilidad frente al control armado.

- *Vinculación de niños niñas y adolescentes - NNA: Reclutamiento Forzado y utilización ilícita de NNA*

La situación de reclutamiento forzado y utilización de NNA tanto en Condoto como en Nóvita varía dependiendo si se trata de un escenario urbano o rural.

En la zona urbana de los municipios, el EGC utiliza a los jóvenes en actividades de tráfico de droga al menudeo, en consumo de sustancias psicoactivas y como campaneros o vigilantes principalmente.

En Condoto, se ha evidenciado en los últimos años un incremento de la utilización de NNA al servicio de este grupo ilegal. La situación se complejiza porque los principales escenarios de cooptación son los centros educativos; según información de la entidad territorial se están presentando reclutamientos desde los colegios por parte estudiantes que ya hacen parte de la estructura quienes reciben la orden del EGC de reclutar a otros estudiantes. En zona rural de Opogodó, también se reporta el ingreso de este grupo ilegal a la institución educativa, lo que supone amenazas y riesgo de reclutamiento; aspecto que también repercute especialmente en niñas y adolescentes que son víctimas de Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA).

En este orden de ideas, los riesgos de reclutamiento en el municipio de Condoto se están presentando en mayor medida en la cabecera municipal, en los corregimientos de Jigualito (limita con Medio San Juan) y Opogodó (limita con Condoto).

En la zona rural de Nóvita se presentan los mayores riesgos y eventos de reclutamiento de NNA, en muchas ocasiones ha tenido que ver la falta de docentes y las dificultades de acceso al territorio. Por ejemplo, a finales del mes de diciembre de 2024 se informó que cinco menores de edad habían sido reclutados por el ELN de la comunidad afrocolombiana de Juntas del Tamaná. Finalmente, el 6 de febrero de 2025, el EGC señaló al ELN como responsable del reclutamiento de nueve niños en medio de acciones de combates, además manifestó que dicha guerrilla había amenazado a consumidores de sustancias psicoactivas en la comunidad Sesego.

En la zona urbana de Nóvita, existen puntos de información en donde están vinculados NNA para controlar el ingreso y salida del territorio, estos puntos se coordinan desde el corregimiento de Opogodó - salida del territorio de Condoto, donde existe una base de la estructura EGC, hasta el ingreso al territorio urbano de Nóvita.

En las zonas urbanas, el reclutamiento de adolescentes se relaciona con el ingreso a filas y actividades de combate, de igual manera, con su utilización en actividades ilícitas asociadas a la siembra de coca y como *raspachines* de coca.

- *Accidentes con Mina Antipersonales (MAP)*

En desarrollo del conflicto, los grupos armados organizados presentes en el territorio han utilizado métodos de guerra como, por ejemplo, el uso de armas no convencionales y de gran impacto para generar terror en la población y frenar la avanzada de otros grupos con intereses expansivos en el territorio.

En el municipio de Nóvita con posterioridad a la emisión de la alerta temprana se han reportado varios accidentes con MAP que han afectado tanto a la población civil como quienes están en medio de las hostilidades.

La instalación de minas antipersonales ha aumentado, y aunque los grupos armados han señalado algunos puntos donde la comunidad no puede transitar, el riesgo para la población civil se ha incrementado, restringiendo además la movilidad y el acceso a zonas de cultivo y a espacios destinados a prácticas tradicionales de producción.

En medio de la disputa territorial entre el ELN y el EGC, ambos grupos estarían instalando este tipo de artefactos explosivos, los hechos más recientes de accidentes e incidentes con MAP se generaron en las comunidades étnicas de Zabaletara (Resguardo indígena) y en las comunidades de Juntas del Tamaná y Sesego (territorio del Consejo Comunitario de Nóvita)

#### E. Síntesis del riesgo actual

El contexto expuesto, a partir del monitoreo y seguimiento realizados tras la emisión de la Alerta Temprana No. 027-21, evidencia el agravamiento de la situación de conflicto en los municipios de Condoto y Nóvita, así como los impactos negativos en el ejercicio y goce efectivo de los DDHH. Esta situación es generalizada y se agrava aún más en el marco de la disputa territorial entre el ELN y el EGC sobre el territorio del San Juan, intensificando los controles sobre la población civil y la generalización de conductas vulneratorias a gran escala, tales como combates en medio de la población civil, desplazamientos forzados masivos, confinamientos, restricciones a la movilidad y la imposición de horarios, contaminación del territorio con MAP/MUSE, reclutamiento forzado y utilización de NNA, amenazas, homicidios y agresiones contra liderazgos comunitarios y personas defensoras de derechos humanos.

Así, se tiene conocimiento de que en Nóvita en lo transcurrido de 2025, han aumentado los controles, retenes armados ilegales, así como requisas a civiles y control de alimentos transportados, por parte del EGC, dicho grupo armado organizado está exigiendo facturas de compra a civiles y motoristas para evitar que se compren provisiones o alimentos al

ELN. De igual manera, realiza señalamientos a los pobladores de colaboradores, a su vez amenaza con llegar y hacer presencia permanente en las comunidades.

En Condoto ha aumentado el arrojamiento de cadáveres en jurisdicción del corregimiento de Opogó, se cree que son miembros de grupos armados ilegales que fallecen en medio de enfrentamientos que se han venido registrando simultáneamente en municipios de Nóvita, Río Iró, Medio San Juan, Istmina y Sipí. Esto representaría un grave problema para la gestión digna de cadáveres que implica el DIH.

Lo anterior es difícil de afrontar ante la carencia de capacidades sociales o factores de protección social, comunitarios e institucionales, que terminan golpeando más fuerte ante la inoportuna, poco coordinada e ineficaz respuesta institucional. Mientras tanto, grupos armados ilegales continúan su proceso de expansión, sumándose al escenario la preocupación de incursión de otros grupos armados ilegales, desde la parte sur o norte de la subregión del San Juan, que a hoy amenazan con ingresar al territorio.

## **2. Análisis de la gestión institucional frente al riesgo advertido en la AT No. 027 de 2021 para los municipios de Condoto y Nóvita**

Mediante la emisión de la Alerta Temprana No. 027-21 para los municipios de Condoto y Nóvita, se formularon recomendaciones dirigidas a las instituciones estatales con competencias en prevención, protección y garantías de los Derechos Humanos en estos municipios, solicitando la adopción urgente de medidas extraordinarias para salvaguardar la vida y la integridad de la población que se encuentra en mayor nivel de riesgo de vulneraciones contra sus derechos.

En la alerta para estos municipios se formularon en total 35 recomendaciones, dirigidas a entidades responsables de prevenir y mitigar los riesgos advertidos a nivel nacional, a nivel territorial y a entidades del Ministerio Público. De igual manera, fueron requeridas las instituciones públicas concernidas para que suministraran en forma completa, detallada y oportuna la información sobre las medidas adoptadas para superar, mitigar o disuadir el escenario de riesgo advertido. A saber:

Entidad Recomendada
Ministerio del Interior
Comisión Intersectorial de Respuesta Rápida a la Alerta Temprana (CIPRAT) del Ministerio del Interior
Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior
Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior
Fiscalía General de la Nación
Ministerio de Defensa Nacional
Ejército Nacional
Policía Nacional
Unidad Nacional de Protección (UNP)
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

Agencia para la Renovación del Territorio (ART)
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Ministerio de Minas y Energías
Consejo Nacional de Estupefacientes
Departamento para la Prosperidad Social (DPS)
Corporación Autónoma Regional del Chocó, CODECHOCÓ
Gobernación del Chocó
Procuraduría General de la Nación
Alcaldía del Municipio de Condoto
Alcaldía del Municipio de Nóvita
Personería municipal de Condoto
Personería municipal de Nóvita

Las siguientes entidades, pese a haber sido receptoras de recomendaciones en la Alerta Temprana No. 027-21, no presentaron respuesta escrita directa a la Defensoría del Pueblo en la que comunicaran sus acciones en la gestión del riesgo advertido (corte 28 de febrero de 2025):

- Gobernación del Chocó
- Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior
- Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior
- Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior
- Procuraduría General de la Nación
- Fiscalía General de la Nación
- Alcaldía Municipal de Condoto
- Alcaldía Municipal de Nóvita
- Personería Municipal de Condoto
- Personería Municipal de Nóvita
- Agencia para la Renovación del Territorio (ART)
- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
- Ministerio de Minas y Energías
- CODECHOCÓ
- Consejo Nacional de Estupefacientes

De las anteriores entidades, no obstante, tanto las Alcaldías como las Personerías de ambos municipios atendieron a la Defensoría del Pueblo durante las constataciones presenciales de gestión del riesgo.

Con base en la información acopiada, tanto de las respuestas allegadas por las entidades con ocasión de las recomendaciones formuladas, así como de la información obtenida durante las visitas de constatación en terreno, se considera que, pese a la gestión institucional realizada, hubo un **CUMPLIMIENTO BAJO** de las recomendaciones, ante las

dinámicas de violencia y los hechos consumados. Esto toda vez que las acciones impulsadas por las diferentes entidades, en su mayoría, evidenciaron debilidades en la oportunidad y coordinación para responder o atender el escenario de riesgo advertido y las recomendaciones formuladas en la Alerta. De igual manera, el bajo cumplimiento también responde al reducido nivel de eficacia que tuvieron las acciones correspondientes a la gestión del riesgo estatal en la mitigación de las amenazas y vulnerabilidades advertidas.

Las categorías de análisis a la luz de las cuales se hizo la valoración de desempeño institucional fueron oportunidad, coordinación y eficacia. Su definición se presenta a continuación:

<b>Oportunidad:</b> hace alusión a la manera en que el accionar institucional se realiza en tiempo, a propósito, y cuando conviene a la recomendación contenida en el documento de advertencia
<b>Coordinación:</b> determina que la comunicación y las actuaciones entre las instituciones llamadas a gestionar la superación del riesgo advertido se desarrollen en condiciones de fluidez y armonía a fin de constituir la unidad estatal en la respuesta institucional
<b>Eficacia:</b> se refiere al posible efecto de las acciones institucionales sobre los riesgos y amenazas advertidas, así como su pertinencia frente a los objetivos de las recomendaciones.

A partir de la información allegada a la Defensoría por parte de las entidades concernidas en la Alerta Temprana y de la constatación *in situ* de las medidas implementadas con ocasión de la AT No. 027 de 2021, se realizará el análisis de la gestión institucional de acuerdo con las dimensiones del escenario de riesgo que fueron advertidas en el marco de la alerta. El análisis del desempeño institucional estará basado en valorar las acciones que, desde el Estado colombiano, se han emprendido para la mitigación de las amenazas a la vida, libertad, seguridad y las infracciones al DIH.

## 2.1 Acciones en materia de disuasión, control y mitigación del contexto de amenaza

<b>Recomendaciones</b>
<p>Al <b>Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional</b> (Batallón Julio Londoño, Batallón de Operaciones No. 25 y 26), reforzar e implementar los operativos de registro y control de la Fuerza Pública en las zonas rurales - área carreteable y zonas de influencia de los ríos (Tamaná, Tajuato, Condoto, San Juan, Cajón) de los municipios de la presente alerta, e incrementar sus labores de inteligencia con el fin de neutralizar el accionar de la minería ilegal, de actividades derivadas del narcotráfico y de los grupos ilegales, para garantizar la seguridad y la protección de los Derechos Humanos de los habitantes. Todo lo anterior, bajo el estricto respeto de los derechos de la población civil.</p> <p>En esa perspectiva, se insta a realizar patrullajes constantes a lo largo del eje vial y las zonas de influencia de los ríos citados anteriormente, de interés para los actores armados ilegales, a fin de contrarrestar las acciones violentas que realizan de manera permanente el ELN y las AGC; así como acatar lo establecido en las Directivas del Ministerio de Defensa No. 07 de 2007 y No. 16 del 2006, de</p>



tal manera que se garantice la protección de los derechos a la vida, integridad, libertad y demás derechos asociados. Toda acción por desarrollar debe acatar de manera irrestricta los principios del DIH, en especial a los principios de distinción, precaución y proporcionalidad.

**Al Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa Nacional, Gobernación del Chocó y a las Alcaldías Municipales** de la presente Alerta Temprana, para que de manera conjunta coordinen e implementen acciones en materia de prevención y protección, orientadas a mitigar y controlar el impacto de las posibles acciones de los grupos armados ilegales que afectan a la población civil de los municipios Nóvita y Condoto. Para ello es pertinente la construcción de un plan de trabajo con actividades, tiempos y responsables bien establecidos, dirigido a disuadir las variables de amenaza y vulnerabilidad que sustentan el riesgo, principalmente en las cabeceras municipales - zona urbana y territorios colectivos de comunidades negras e indígenas ubicados en ejes viales y ríos por el riesgo en que se encuentran ante una eventual confrontación o incursión armada.

Para tal efecto, se requiere la atención debida de los enfoques diferenciales étnicos contemplados en los Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011 en materia de prevención para comunidades indígenas y afrocolombianas.

**Al Gaula del Ejército y de la Policía Nacional**, hacer presencia, de acuerdo con sus competencias, en las vías que comunican los municipios de la presente Alerta Temprana, para evitar acciones de secuestros y extorsiones por parte del ELN y las AGC contra comerciantes, transportadores, mineros, servidores públicos y población civil ante los riesgos advertidos. De igual forma, implementar campañas de difusión de rutas e incentivos para la denuncia frente a estos casos.

A la **Policía Nacional** que cumpla con su deber constitucional de protección a la población civil y que ejerza un mayor control y patrullaje en el perímetro urbano de los municipios de Nóvita y Condoto, acciones que deben realizarse en horarios diarios y nocturnos, con el propósito de garantizar la seguridad de todos los habitantes y el ejercicio de sus actividades diarias, cotidianas y/o económicas tradicionales, indispensables para crear un entorno de seguridad, tranquilidad, estabilidad y convivencia pacífica.

A la **Policía Nacional, comandantes de estación, subestación y de centro de atención** inmediata de Policía, como autoridades de policía, adoptar y reforzar, en coordinación con los **alcaldes de los municipios de Condoto y Nóvita**, medidas de seguridad como el incremento de los patrullajes diarios y nocturnos, rondas, registro y control de personas y vehículos en las entradas y salidas de los municipios alertados y hacer mayor presencia en las zonas donde se encuentran las instituciones educativas.

Particularmente, en materia de disuasión del riesgo, como medidas para reforzar los dispositivos de seguridad y la protección de los consejos comunitarios y resguardos de los municipios, la Defensoría del Pueblo recomendó: a) el aumento de patrullajes por parte de la Policía y el Ejército a lo largo de los territorios colectivos para contrarrestar la presencia de grupos armados ilegales; b) el aumento en las acciones de registro y control por parte de la Policía y el Ejército en las cabeceras municipales, vías y los territorios focalizados en riesgo por el Sistema de Alertas Tempranas; c) el aumento del pie de fuerza en los municipios advertidos.

Estas recomendaciones, dirigidas principalmente al Sector Defensa, en coordinación con los entes territoriales, se han implementado parcialmente o no presentan avances en su implementación. A continuación, se presentan unas conclusiones preliminares:

- i. La Fuerza Pública no ha sido efectiva contrarrestando a los grupos armados ilegales y todavía no ejerce una presencia sostenida en los territorios advertidos

- por la Defensoría del Pueblo tanto en los sectores carreteables como en los ríos focalizados en Condoto y Nóvita.
- ii. No existe una presencia de la Armada Nacional en los territorios focalizados, a pesar del carácter estrictamente fluvial de la geografía de los ríos Condoto, Cajón, Tamaná, entre otros.
  - iii. La Fuerza Pública carece de recurso humano (y en ocasiones también de equipamiento suficiente) para desarrollar sus labores de seguridad.

Primero, es importante resaltar que las comunidades rurales de Condoto y Nóvita afirman que la presencia militar no ha sido efectiva para contrarrestar las amenazas que se ciernen sobre la población de los municipios. Existe consenso en señalar que el accionar de los grupos armados ilegales (ELN y EGC), a lo largo de la subregión, no ha podido ser contrarrestado por la Fuerza Pública. Algunos liderazgos y organizaciones sociales de la región agregan que no sólo el Ejército no ejerce el control territorial sobre los territorios rurales de los municipios, sino que tampoco existe por parte de la población la confianza suficiente en dicha institución para solicitar una presencia más activa y sostenida a lo largo de los sectores focalizados en la Alerta Temprana. Esta situación no es homogénea en todos los corregimientos y comunidades. Mientras que en los sectores fluviales más alejados de las cabeceras municipales persiste una marcada desconfianza hacia las fuerzas de seguridad del Estado, los liderazgos de las comunidades más urbanas y con acceso carreteable defienden la necesidad de fortalecer la presencia de la Fuerza Pública. A lo anterior se suma otro vacío institucional: el escaso pie de fuerza de Ejército

Las organizaciones sociales señalan que la Fuerza Pública no es el actor armado que ejerce el control territorial en la subregión. Algunas comunidades agregaron que el Ejército no ha patrullado sus comunidades desde las elecciones presidenciales de 2022. Afirman, adicionalmente, que el control de los grupos armados ilegales sobre ciertos territorios rurales está ampliamente consolidado. Se manifiesta abiertamente que la Fuerza Pública no tiene presencia rural y, la Defensoría del Pueblo, al recorrer los ríos y sectores carreteables con las amenazas más apremiantes durante la constatación *in situ*, no pudo evidenciar la presencia de ninguno de los componentes de Fuerza Pública desarrollando operaciones. El Ejército, no obstante, mediante radicado 005009 del 12 de mayo de 2022, le afirmó a la Defensoría del Pueblo estar desarrollando actividades militares con regularidad en los territorios advertidos. A lo anterior se suma otro vacío institucional: el escaso pie de fuerza de Ejército y Policía en la subregión. Funcionarios públicos de ambas administraciones municipales señalaron que han solicitado reiteradamente el aumento de unidades de policía y pelotones del Ejército en sus jurisdicciones. “En Nóvita tan sólo hay cinco (5) policías activos. Además, no salen de cabecera. Así es imposible”, señalaron desde la Alcaldía. En Condoto la situación es la misma. Desde la administración se señala que durante el 2024 hubo diez unidades de policía, cuando en el pasado había alrededor de 16. La Personería reportó, adicionalmente, que en un momento la PONAL no tenía vehículo disponible, por lo que no podía hacer sus patrullajes en carro, lo que limitaba ampliamente su accionar y la seguridad de su personal.

Funcionarios de la Alcaldía de Condoto aseguraron que las solicitudes de aumento de pie de fuerza se cumplen tan solo parcialmente. “Los grupos GAULA que llegan son

transitorios, el Ejército que pasa es transitorio”. Inclusive, se señala desde el Ministerio Público que en un momento llegó la orden de quitar el Batallón que hace presencia en Condoto. Aparentemente, su salida, según algunas versiones, era para trasladar una empresa minera a la que debían proveerle seguridad. Finalmente, por medio de un consejo de seguridad, la Alcaldía manifestó que pudo evitar que el cuerpo militar fuera trasladado a otro municipio.

Todas las fuentes consultadas llegan a la misma conclusión: no hay pie de fuerza suficiente para contrarrestar el control de los grupos armados ilegales.

El dominio territorial por parte del ELN y el EGC sobre la geografía de los municipios depende en buena medida de la ausencia de una presencia militar institucionalizada e ininterrumpida. Voceros de las organizaciones sociales y de los consejos comunitarios sostienen que el Ejército no patrulla más allá de los sectores urbanos y las zonas colindantes a vías importantes y que la Policía Nacional tan solo tiene presencia en las cabeceras municipales.

Este vacío institucional en materia de seguridad responde hasta cierto punto a que la geografía rural de la región dificulta la movilidad y la cobertura de la Fuerza Pública, limitando su accionar a patrullajes esporádicos y por intervalos de tiempo irregulares. Esto se debe al carácter preponderantemente fluvial del territorio y a la falta de vías de comunicación, lo que dificulta el despliegue operacional del Ejército. Estas dificultades en materia de cobertura militar, la ausencia civil del Estado y el dominio territorial de los grupos armados ilegales explicarían la constante materialización de los riesgos advertidos y se traducen en que actualmente las comunidades afrocolombianas e indígenas de la subregión continúen sufriendo violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH.

Ante esta falta de cobertura de seguridad, para las administraciones locales resulta imperativa la necesidad de que la Fuerza Pública (en todos sus componentes) amplíe su pie de fuerza y su despliegue territorial. Otro vacío existente, señalan, es que no exista presencia de Armada Nacional a pesar de la geografía fluvial de buena parte de los municipios. Esta solicitud de fortalecimiento y despliegue de la Fuerza Pública, en línea con las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, debe estar acompañada de un irrestricto respeto por la autonomía territorial de los territorios colectivos, un apego férreo al DIH, y una presencia institucional permanente que permita fundar lazos de confianza entre las comunidades y la Fuerza Pública.

## 2.2. Acciones de Investigación y acceso a la justicia

Recomendaciones
A la <b>Fiscalía General de la Nación</b> , adelantar las investigaciones pertinentes y conducentes para dar con los responsables de los homicidios violentos que se han presentado en los municipios de la presente Alerta en lo corrido del año; para lo anterior, se sugiere tomar como punto de partida para los planes de investigación que se proponga los escenarios descritos en la presente alerta temprana.

En materia de investigaciones y judicializaciones también se vienen presentando inconvenientes de desempeño institucional. Varios de los liderazgos del territorio le comunicaron a la Defensoría del Pueblo que los espacios interinstitucionales de denuncia y participación de víctimas no garantizan los mínimos de confidencialidad para que las comunidades presenten sus afectaciones ante los organismos judiciales —como la Fiscalía local de Condoto— o del Ministerio Público. Esto incluye escenarios como los Consejos de Seguridad y los Comités de Justicia Transicional, de los cuales señalan que una vez son finalizados, los grupos armados ilegales conocen toda la información que fue analizada en el desarrollo de dichas instancias interinstitucionales.

Estos espacios de coordinación se ven obstaculizados cuando existe un manifiesto temor a la denuncia o cuando la legitimidad institucional no es suficiente para promover la participación. Más de un funcionario público y representantes de las organizaciones sociales le han comunicado a la Defensoría del Pueblo el riesgo que representa tratar ciertos temas de seguridad en escenarios interinstitucionales o abiertos al público. Esta zozobra se explica por el temor que representa la posibilidad de que los actores armados ilegales hayan permeado las diferentes instancias de participación. Como consecuencia, la ausencia de confidencialidad limita la capacidad de coordinación que puedan desarrollar las entidades en materia de orden público y a las organizaciones en su derecho a la participación.

El temor y la falta de confianza institucional interrumpen los procesos investigativos y judiciales, a la vez que le presentan al público un escenario atenuado de conflictividad, según el cual la ausencia de denuncias refleja una falsa calma y tranquilidad, cuando en realidad la deslegitimación institucional es un agravante de la situación de orden público que padecen las comunidades y que se manifiesta en victimizaciones muchas veces invisibilizadas.

A pesar de haber presentado respuestas escritas a la Defensoría del Pueblo para evidenciar su gestión del riesgo, y de estar explícito en una recomendación de la Alerta Temprana, la Policía Nacional no comunicó acciones para mejorar la confianza institucional e incentivar la denuncia en condiciones de seguridad para los denunciantes. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación no respondió por escrito a la Defensoría del Pueblo. Por tal motivo no es posible valorar el alcance y la dimensión de la gestión de riesgo adelantada por el ente investigativo.

### 2.3. Acciones de Prevención y Protección

<i>Recomendaciones</i>
Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en coordinación con la <b>Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento Forzado y la Utilización de NNA en el conflicto armado - CIPRUNNA</b> , la <b>Gobernación del Chocó</b> y las <b>alcaldías municipales</b> de la presente Alerta Temprana, llevar a cabo acciones de prevención del reclutamiento forzado y utilización de NNA en los Municipios de Nóvita y Condoto, así como el diseño e implementación de una ruta efectiva de atención a jóvenes

víctimas de ésta infracción, según lo establece el documento CONPES No. 3673 de julio de 2011. Todo esto con el objeto de elaborar e implementar una estrategia de prevención del reclutamiento forzado y la utilización ilícita en las acciones del conflicto armado en observancia del enfoque diferencial étnico y de género. Sobre el particular, es menester que estas acciones trasciendan la oferta de los programas regulares que actualmente se encuentran en proceso de ejecución.

A las **Direcciones de Derechos Humanos, de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías y, de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior**, en coordinación con la **Gobernación del Chocó y las Alcaldías Municipales de Nóvita y Condoto**, elaborar y apoyar en la financiación e implementación de una estrategia de prevención temprana, y protección colectiva de derechos, orientada a la protección de grupos poblacionales en riesgo, tales como NNAJ, Mujeres, líderes(as) comunitarios(as) y funcionarios(as) públicos(as).

A la **Unidad Nacional de Protección (UNP)**, dar mayor celeridad a los estudios del nivel riesgo e implementación oportuna de las medidas de protección a que haya lugar, con el fin de garantizar la integridad de líderes, lideresas, organizaciones y colectivos en riesgo.

A la **Unidad Nacional de Protección (UNP)**, formular e implementar una estrategia para la identificación oportuna in situ de líderes, lideresas, organizaciones y colectivos en riesgo, a fin de implementar mecanismos de protección y prevención ante cualquier posible situación de amenaza en su contra.

A la **Unidad de Protección (UNP)**, en coordinación con la **Gobernación de Chocó, Alcaldías Municipales de Nóvita y Condoto y Personerías Municipales**, identificar en las zonas de las que trata la presente Alerta a potenciales personas y colectivos en situación de riesgo que puedan requerir del debido acompañamiento institucional en materia de protección, conforme los programas adoptados para tal efecto en los Decretos 1066 de 2015, 2078 de 2017 y 660 de 2018, así como lo dispuesto mediante los Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011. Lo anterior, previa concertación con las comunidades a acompañar.

Hecho esto, se insta a implementar a la mayor brevedad las evaluaciones de riesgo e implementación de medidas de protección a que hubiere lugar, de conformidad con las normas y jurisprudencia vigente, así como las consideraciones especiales que merecen sujetos de especial protección constitucional como mujeres, comunidades indígenas, comunidades afrocolombianas, adultos mayores, poblaciones en situación de desplazamiento forzado, defensores(as) de Derechos Humanos, entre otras.

Es importante que se asegure que las diversas comunidades en riesgo conozcan de manera directa, clara y detallada las rutas de protección ordinaria y de emergencia, así como los planes de contingencia, instancias competentes, mecanismos y datos de contacto para su respectiva activación. Así mismo, se exhorta a que la UNP no condicione su acción institucional para atender la presente recomendación a la individualización que realizare la Defensoría del Pueblo respecto a cada una de las personas potencialmente en riesgo, en tanto que se sobreentiende que el presente documento advierte riesgos colectivos contra grupos sociales que requieren de la debida diligencia de las autoridades competentes para identificar y proteger a personas y colectivos en riesgo que requieren ser acompañados institucionalmente de manera inmediata, ante la gravedad de las situaciones de riesgo expuestas.

A la **Secretaría de Salud Departamental y Secretarías de Salud de Nóvita y Condoto**, para que se adelanten en coordinación con la comunidad educativa de las Instituciones educativas de los municipios, campañas de atención y prevención del consumo de sustancias psicoactivas dirigidas a NNAJ y población civil en general.

Como acciones de prevención y protección para la población objeto de la AT No. 027-21 para los municipios de Condoto y Nóvita, la Defensoría del Pueblo identificó en la Alerta

Temprana tres dimensiones del escenario de riesgo que requerían de la debida diligencia de las entidades para garantizar la protección y defensa de los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de la población civil.

Primero, se identificaba el riesgo al que se encontraban expuestos varios sectores poblacionales, entre ellos las personas defensoras de derechos humanos, las personas que ejercen roles de liderazgo social y las organizaciones sociales, entre otros, para los que se proponía una serie de medidas con el fin de garantizar su seguridad.

Segundo, se ubicaba la necesidad de emprender acciones de prevención de reclutamiento, uso y utilización de NNA por parte de grupos armados, en los componentes de prevención temprana, prevención urgente y prevención en protección (CONPES 3673).

Tercero, la Defensoría del Pueblo establecía como necesarias las acciones de prevención de consumo de sustancias psicoactivas, sobre todo para la población de NNA.

- a. Acciones para la protección de personas defensoras de derechos humanos, personas que ejercen roles de liderazgo social y organizaciones sociales en riesgo en el marco de la AT 027 de 2021

Como primera medida, en cuanto a las responsabilidades que la Gobernación del Chocó y las alcaldías de Condoto y Nóvita tienen respecto a la protección de las personas defensoras de derechos humanos y las organizaciones sociales, la AT No. 027 de 2021 identificaban la necesidad de que las administraciones municipales y las departamentales, junto con la Unidad Nacional de Protección, diseñaran una estrategia de identificación temprana de riesgos para líderes y lideresas, en cumplimiento del Decreto 2252 de 2017.

Esta recomendación, en términos generales, no presenta ningún cumplimiento hasta el momento. Por un lado, la Gobernación del Chocó no presenta ninguna acción escrita sobre este tema a la Defensoría del Pueblo. Por el otro lado, las alcaldías de Condoto y Nóvita presentan la socialización de las rutas de protección individual y colectiva, pero no exponen ninguna acción que se materialice en la identificación temprana de riesgos, incumpliendo su responsabilidad como primeros respondientes.

Sumado a ello, es de resaltar que los riesgos para las personas defensoras de derechos humanos han venido sosteniéndose con el tiempo, como se lo manifestaron a la Defensoría del Pueblo las organizaciones sociales del territorio, sin que se evidencie una respuesta oportuna y coordinada del Estado para detener las amenazas. La Defensoría del Pueblo tuvo conocimiento de liderazgos bajo amenaza a lo largo de la cuenca del río Tamaná, además de intimidaciones por parte de los grupos armados ilegales hacia las organizaciones sociales en ambos municipios. Estas amenazas fueron denunciadas públicamente por la Defensoría del Pueblo y quedaron consignadas en el Oficio No. 20240040400555121 que emitió el Sistema de Alertas Tempranas el 08 de febrero de 2024. Esto ha generado un ambiente de tensión y zozobra que obstaculiza el correcto funcionamiento de los procesos organizativos y la defensa de los derechos humanos.



Es posible afirmar que los riesgos que presentan las personas defensoras de derechos humanos, líderes, lideresas y organizaciones sociales, hasta el momento, no han sido oportunamente atendidos por las entidades públicas responsables, a la vez que tampoco se evidencia que exista una coordinación interinstitucional que busque aunar esfuerzos para la mitigación de esta amenaza. Evidencia de lo anterior es que ambas Personerías le reportaron a la Defensoría del Pueblo los obstáculos que han tenido que sobrellevar en la situación de amenazas inminentes a personas defensoras de derechos humanos. En ninguno de los dos municipios existe un protocolo claro para el traslado de liderazgos en situación de riesgo, ni se cuenta con presupuestos asignados para su implementación., Esto ha derivado en que los traslados se lleven a cabo “improvisadamente” y “haciendo colectas” entre los funcionarios públicos locales.

Sumado a lo anterior, las entidades del orden local reportaron que las gestiones de la Unidad Nacional de Protección en los dos municipios se limitan a la solicitud de individualizaciones (contrario a lo recomendado por la Defensoría del Pueblo). En su criterio, no existe una voluntad de coordinación con las Alcaldías y las Personerías Municipales, como constantemente lo recomienda el Sistema de Alertas Tempranas. Como evidencia de lo anterior, la UNP le solicitó a CIPRAT:

*“(..) en procura de coordinar las acciones necesarias para mitigar los riesgos expuestos en la Alerta Temprana previamente citada, se requiere con carácter URGENTE la documentación e individualización de los casos de amenaza individual o colectivo, de los que su honorable despacho, tenga información o conocimiento, toda vez que para adelantar acciones específicas sobre los mismos (...)”<sup>7</sup>.*

Que la Unidad Nacional de Protección limite su gestión del riesgo a la solicitud de individualizaciones permite afirmar que la entidad no ha dado cumplimiento a las recomendaciones de la Defensoría, que expresamente le solicitan ampliar su gestión de riesgo hacia las comunidades focalizadas, en concordancia con lo dispuesto en el decreto 1581 de 2017 en cuanto a la territorialización de la oferta de protección. Las acciones de la Unidad en el marco de la Alerta Temprana 027 de 2021 se han limitado a solicitar con carácter de urgencia a las alcaldías, las personerías y a la gobernación, generalmente vía nación-territorio, la solicitud de individualización de las situaciones de riesgo de las que se tenga conocimiento a nivel local.

Por otra parte, las Personerías Municipales señalaron durante las constataciones presenciales de la Defensoría del Pueblo que la UNP tiende a comunicarse exclusivamente vía correo electrónico, por lo que no ha dado cumplimiento *in situ* a la necesidad de llevar a cabo sesiones de retroalimentación de su accionar con las comunidades étnicas. Estas comunidades argumentan que los procesos colectivos de protección no avanzan o están estancados, y, adicionalmente, se quejan de la constante violación de la Unidad al enfoque étnico y territorial, pues señalan que la entidad no comprende la especificidad

---

<sup>7</sup> Correo electrónico sin radicado, fechado 24 de julio de 2023.

de las amenazas que se ciernen sobre los colectivos, y pretenden, por ejemplo, que la comunicación sea por celular en lugares donde no existe señal de telefonía móvil.

Por último, resulta preocupante que la UNP desconozca sus responsabilidades en el marco de los escenarios de riesgo advertidos por la Defensoría del Pueblo y las recomendaciones del Sistema de Alertas Tempranas. En un correo electrónico del 24 de julio de 2023, la UNP le comunicó a la CIPRAT:

***“(…) es oportuno mencionar que, una vez analizado el documento de advertencia no evidenciamos hechos o circunstancias de riesgo, frente a los cuales la Unidad Nacional de Protección, pueda avocar competencia particularmente”.***  
(negrilla propia).

Una afirmación de este tipo desconoce el análisis de riesgo adelantado por la Defensoría del Pueblo y obstaculiza que la gestión de la UNP se materialice en acciones de protección para la población que presenta amenazas en la subregión del San Juan chocoano.

b. Acciones de prevención de reclutamiento, uso y utilización de Niños, Niñas y Adolescentes.

Como ya lo ha manifestado la Defensoría del Pueblo en otros informes de seguimiento a Alertas Tempranas del departamento del Chocó<sup>8</sup>, el riesgo de reclutamiento tiende a ser mayor en zonas alejadas de las cabeceras municipales, como los ríos advertidos en la AT 027 de 2021. Esto se hace más complejo si se suma a la falta de presencia estatal en los sectores más distanciados, donde la Fuerza Pública no logra mantener el control del territorio. No obstante, actualmente la consolidación del EGC como grupo armado ilegal con control en los centros poblados también amenaza directamente a los NNA de las cabeceras y de las zonas urbanas. Esto se evidencia en el casco urbano de Condoto, por ejemplo, en donde la Personería ha denunciado sectores de alto riesgo para los NNA<sup>9</sup>.

El reclutamiento forzado, como acción victimizante y conducta contraria al DIH, de acuerdo con la constatación de acciones que realizó la Defensoría del Pueblo, no cuenta por el momento con una estrategia institucional clara de prevención en ninguno de los dos municipios. Esto resulta preocupante, teniendo en cuenta que organizaciones sociales le comunicaron a la Defensoría del Pueblo que el riesgo sigue presente y que los consejos comunitarios han tenido que intervenir en ocasiones para que los grupos armados ilegales no se lleven forzosamente menores de edad.

Lo anterior no significa que no se hayan emprendido esfuerzos para combatir este delito. La administración municipal de Condoto le comunicó a la Defensoría el diseño de acciones de prevención de reclutamiento que se están formulando para ser implementadas en los

<sup>8</sup> Por ejemplo, el IS No. 006 de 2025 para la Alerta Temprana No. 016 de 2021 para los municipios de Bojayá, Medio Atrato (Chocó) y Vigía del Fuerte (Antioquia).

<sup>9</sup> La Personería reporta que el barrio urbano Cascajero, por ejemplo, es un epicentro de amenazas para NNA y para la población en general. Una de las principales afectaciones es el reclutamiento, uso y utilización de menores de edad que se produce en su jurisdicción.

dos colegios con mayor número de estudiantes del municipio (Colegio María Auxiliadora, Colegio Scipión). De acuerdo con los funcionarios de la Alcaldía, el proyecto busca fomentar en los NNA un buen aprovechamiento del tiempo libre, basado en el deporte, la cultura y el arte, con el fin de limitar las posibilidades que tienen los grupos armados ilegales de cooptarlos, utilizarlos e involucrarlos en actividades ilícitas. Este tipo de estrategias deben ser valoradas, pero hasta el momento carecen de implementación formal, es decir, no han comenzado a ser implementadas y se proyectan a futuro. Adicionalmente, de acuerdo con lo reportado por la Alcaldía, estas estrategias carecen de indicadores que permitan evaluar su alcance, resultados y su impacto efectivo en la prevención del reclutamiento.

Bajo ese panorama, ni la Alcaldía de Nóvita ni la Gobernación del Chocó reportan acciones tangibles en cuanto a la recomendación de prevención de reclutamiento. Esto presenta como agravante que el escenario de riesgo identificado en la Alerta Temprana exponía la necesidad de acción preventiva dentro del componente de prevención en protección, teniendo en cuenta la gravedad del riesgo, por lo que la recomendación de la Defensoría buscaba accionar una respuesta inmediata para identificar casos de amenaza de reclutamiento y generar las extracciones o procesos de restablecimiento de derechos a los que hubiera lugar dentro de la inminencia.

Así, en el marco de la prevención en protección, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos viene formalizando en los últimos años en Chocó la conformación de los Equipos de Acción Inmediata de prevención de reclutamiento. No obstante, la operatividad de estos equipos es actualmente materia de debate. Su funcionalidad no está propiamente delimitada, sus presupuestos dependen de la discrecionalidad de las administraciones de turno y, adicionalmente, no se conoce públicamente cuáles son los protocolos que rigen su actuación, sus rutas de acción y de qué forma su accionar se hace operativo en la eventualidad de que se conozca un caso inminente de reclutamiento.

Así las cosas, las únicas acciones concretas para prevenir la vinculación de NNA a grupos armados ilegales que se están ejecutando actualmente en el marco de la AT 027-21 parecen provenir del ICBF y se concentran en la prevención temprana. En 2023, el ICBF entregó en Nóvita 97 cupos y en Condoto 449 cupos para los programas Generaciones Sacúdete, Sacúdete étnicos y Explora, que contemplan la conformación de entornos protectores como base de prevención de reclutamiento.

Sin desestimar la importancia de este tipo de programas, que igual no presentan un despliegue territorial para la totalidad de la población (en el corregimiento de Urábara, Nóvita, por ejemplo, reportan que nunca ha llegado la cobertura del ICBF, cosa que se repite en varias comunidades del Alto Tamáná), no se identifican acciones coordinadas de los entes territoriales en el marco de sus competencias para prevenir el reclutamiento, a la vez que la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, en su calidad de Secretaría Técnica de la CIPRUNNA, no tiene presencia territorial sostenida en los municipios. Es imperante resaltar que la Defensoría del Pueblo ha referido reiteradamente que la vinculación ilícita de NNA sigue afectando los derechos de la población y requiere

de la atención inmediata por parte de las autoridades competentes en todas sus modalidades.

- c. Acciones de prevención de consumo de sustancias psicoactivas (SPA), especialmente para la población de niños, niñas y adolescentes de los municipios de Condoto y Nóvita.

Como último punto, es de crucial importancia resaltar el vacío de acciones institucionales para la prevención de consumo de sustancias psicoactivas, especialmente para la población de NNA de los municipios de Condoto y Nóvita. Esta problemática, conforme la Alerta, es una vulnerabilidad importante que expone a NNA a ser víctimas de otras vulneraciones a sus derechos en el contexto del conflicto referido.

En el marco de las recomendaciones de la Alerta Temprana No. 027 de 2021, la Defensoría del Pueblo señaló la importancia de coordinar acciones entre las secretarías municipales de salud y las instituciones educativas para la difusión de campañas y formulación de estrategias para la prevención de consumo de SPA. Estas acciones, de acuerdo con la información recabada por la Defensoría del Pueblo en el marco de sus constataciones, no se han producido de manera oportuna, lo que amenaza con exacerbar los riesgos cada vez más tangibles en materia de consumo de narcóticos.

Fuentes comunitarias y funcionarios públicos de los municipios le manifestaron a la Defensoría del Pueblo que la Policía Nacional —y la población civil en general— tienen plenamente identificadas las “ollas” de expendio de drogas. Estas ollas, ubicadas en sectores urbanos reconocidos y abandonados institucionalmente (como el barrio Cascajero en Condoto), representan una amenaza para la salud de jóvenes, niños, niñas y adolescentes, y para la población civil en general, y hasta el momento no han logrado ser erradicadas por la Fuerza Pública.

Tomando lo anterior en consideración, se requiere de un accionar institucional que por un lado permita el desmantelamiento de dicha ollas, y que también trabaje por la prevención de consumo que logre contrarrestar los efectos adversos del expendio ilegal de sustancias psicoactivas, considerando por un lado que dicho consumo puede derivar en una crisis insostenible de salud pública, y, por el otro, que el tráfico de estupefacientes representa una fuente de financiación de los grupos armados ilegales que invariablemente va ligada a violaciones de derechos humanos.

Adicionalmente, el riesgo de consumo problemático de SPA no está presente exclusivamente en entornos urbanos. Fuentes provenientes de las organizaciones sociales le señalaron a la Defensoría del Pueblo que los NNA de las comunidades rurales también conviven con la amenaza, debido a que los grupos armados ilegales con frecuencia utilizan el consumo de SPA como estrategia para la instrumentalización.

Es esencial que el Estado colombiano active sus herramientas de prevención y protección en materia de consumo de SPA, haciendo énfasis en la población de menores de edad, en la totalidad del departamento del Chocó. Sin una gestión del riesgo oportuna y eficaz en

esta materia, la continuidad de las amenazas puede conducir a un escenario de crisis en salud pública y privación de derechos de la niñez.

#### 2.4. Acciones de atención humanitaria integral.

Recomendaciones
A la <b>Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV)</b> para que brinde asistencia técnica y acompañamiento a los municipios de la presente Alerta, en el seguimiento a la actualización y socialización de los Planes de Contingencia municipal.

Para la atención de las poblaciones identificadas en el escenario de riesgo de los municipios de Condoto y Nóvita, las entidades reportan sus acciones relacionadas con la activación o actualización de los planes de contingencia.

Para la vigencia 2024, los dos planes de contingencia municipales han sido actualizados y aprobados en el marco de los Comités de Justicia Transicional. Si se consideran consumados la gran mayoría de los riesgos descritos en la Alerta Temprana, la actualización y aprobación de estos instrumentos de planeación representa, una posibilidad de acceso a condiciones mínimas de supervivencia para la población en el marco de las emergencias humanitarias, por supuesto, siempre y cuando los mencionados planes resulten operativos en su implementación y cuenten con una asignación de recursos razonable y suficiente.

No obstante, en el caso de la Gobernación del Chocó, la necesidad de formular, aprobar y volver operativas las herramientas de planeación preventiva, como el Plan de Contingencia Departamental, resulta preocupante. En las dos últimas administraciones departamentales (2016-2019 y 2020-2023) el presupuesto en materia de ayudas humanitarias inmediatas para eventos masivos consignado en el Plan de Contingencia Departamental no se vio reflejado de ninguna manera en entregas de ayuda humanitaria inmediata en los municipios del San Juan.

Resulta imperante que los instrumentos de contingencia se materialicen en atención digna para las víctimas de conductas vulneratorias (las organizaciones sociales reportan que las entregas en la subregión han sido exiguas y aseguran que la Gobernación no ha desempeñado mayor responsabilidad en ellas). Esto representa una dificultad, al evidenciar que la actualización y aprobación de los distintos planes no es indicador suficiente de atención oportuna y a satisfacción de las comunidades que están bajo amenaza y se requiere de mecanismos de verificación que permitan determinar si realmente la planeación municipal y departamental se vuelve tangible a nivel local por medio de recursos y acciones de las administraciones.

En este punto, es importante destacar el carácter prioritario que deben tener la incorporación de las herramientas de prevención dispuestas por la ley, así como las disposiciones de la Ley de Víctimas, en los procesos de planeación. Es fundamental que

dichos instrumentos y planes se formulen con asignaciones presupuestales suficientes, en el marco de las posibilidades fiscales de los municipios de categoría seis.

Estas debilidades en materia de prevención urgente exacerban el riesgo ya consumado en diferentes comunidades focalizadas en la Alerta Temprana. Buena parte de la población advertida se encuentra al día de hoy en estado de confinamiento<sup>10</sup> y ha sufrido desplazamientos<sup>11</sup>, situación que explica la crisis humanitaria (y alimentaria) que padecen las comunidades indígenas y afrocolombianas.

La presencia de grupos armados ilegales dentro de los territorios colectivos genera una ruptura en el desarrollo de las actividades productivas de los habitantes de los municipios. Las comunidades ven interrumpida su libertad de movilidad para la pesca, la caza y las labores agrícolas, y al mismo tiempo se les impide la salida de sus comunidades para emprender actividades de comercio, la entrada y salida de productos (en violación a la Ley 21 de 1991 y al Convenio 169 de la OIT).

#### 2.5 Acciones para la mitigación de vulnerabilidades sociales

<i>Recomendaciones</i>
Al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado -UARIV, Departamento Nacional para la Prosperidad Social -DPS, a la Gobernación del Chocó y Alcaldías de los municipios de Nóvita y Condoto, gestionar, apoyar, diseñar y/o implementar proyectos productivos y/o estrategias productivas comunitarias o de apoyo a procesos productivos y consolidación de economías campesinas propias, de acuerdo con las condiciones del territorio y las necesidades de las comunidades, para los habitantes de los respectivos municipios, priorizando a los grupos étnicos o comunidades que se encuentren en mayor situación de vulnerabilidad o de afectación por la presencia y acciones de grupos armados ilegales en el territorio.
Al Ministerio de Minas y Energía, Agencia Nacional de Minería -ANM, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, al Ministerio de Medio Ambiente, al Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), formular y ejecutar plan de acción de manera coordinada para la formalización de los pequeños y medianos mineros de los municipios de Nóvita y Condoto del departamento del Chocó, con enfoque diferencial y étnico. Lo anterior, para que se garantice el ejercicio de la actividad tradicional de acuerdo con el derecho de prelación, mediante el empleo de prácticas limpias de producción y la sostenibilidad del recurso, que garanticen la subsistencia, la seguridad y soberanía alimentaria de las presentes y futuras generaciones, de acuerdo con principios ambientales. Para lo anterior, es pertinente coordinar acciones con los entes territoriales municipales y gobernación del Chocó, haciendo control para evitar la subcontratación entre pequeños mineros, consejos comunitarios, resguardos indígenas y multinacionales.
Al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Gobernación del Chocó y a las alcaldías de Condoto y Nóvita, implementar en los municipios de la presente Alerta Temprana programas y proyectos, de

<sup>10</sup> Oficio de Consumación 20220040400868301, 04 de abril de 2022.

<sup>11</sup> Oficio de Consumación 20230040402082721, 29 de mayo de 2023.



conformidad con su priorización como territorios objeto de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET, de acuerdo con las condiciones del territorio y necesidades de las comunidades.

A la **Gobernación del Chocó**, por medio de su **Secretaría de Salud**, crear, adecuar y dotar los centros y puestos de salud necesarios en los municipios de la presente Alerta Temprana; así mismo, emprender acciones para la contratación de personal calificado que brinde la asistencia en materia de atención en salud.

A la **Alcaldía Municipal de Nóvita**, para que realice las gestiones necesarias ante la Secretaría de Infraestructura Departamental, para que se logre la construcción de la vía carreteable que comunique a Nóvita con San José del Palmar, de tal forma que se mejoren las condiciones de acceso y comunicación, para las comunidades y los agricultores para la producción, movilización y/o transporte de sus productos con fines de comercialización en otros mercados.

#### a. Acciones en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

A partir de la información recogida *in situ* en el desarrollo de las constataciones, para la Defensoría del Pueblo es evidente la confusión que existe sobre todo en las comunidades rurales acerca de los avances en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Las comunidades de Condoto y Nóvita no conocen con claridad cuáles son los proyectos priorizados, cuáles están en ejecución, cuáles ya fueron aprobados y cuáles son los avances en su implementación.

Varias de las organizaciones sociales señalaron que han buscado programar encuentros de seguimiento con las directivas de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), pero no han tenido éxito<sup>12</sup>. Su propósito es conocer qué se ha hecho, cuáles han sido los resultados, el alcance y los obstáculos de los proyectos implementados y cuál es el plan de acción de implementación en la actualidad, teniendo en cuenta que buena parte de los proyectos han sido ampliamente criticados debido a su manejo de los recursos y a su ejecución (sobre todo en Nóvita).

Sumado a lo anterior, liderazgos pertenecientes al grupo motor de los PDET le comunicaron a la Defensoría del Pueblo que se han denunciado ante Procuraduría General de la Nación irregularidades en la implementación de ciertos proyectos PDET en Nóvita. Esto incluye un proyecto de masificación del cultivo de plátano y su transformación que, de acuerdo con las fuentes consultadas, no pudo ejecutarse con éxito, lo que significó, hasta el momento, la pérdida de una inversión cercana a 16.000 millones de pesos

También se reportan irregularidades que se afirma ya fueron denunciadas ante Procuraduría General de la Nación en un proyecto de instalación de energía renovable por medio de paneles solares en sectores rurales del municipio de Nóvita.

<sup>12</sup> La Personería Municipal de Condoto afirma que la Agencia para la Renovación del Territorio (ART) es, junto con la Unidad Nacional de Protección (UNP), las entidades concernidas en la Alerta Temprana que menos hacen presencia en el municipio. Señala que hasta el momento no tiene conocimiento de quiénes son los enlaces para el departamento del Chocó.

En Condoto el panorama de implementación es más favorable. La administración municipal reporta importantes avances en materia de infraestructura, que incluyen la pavimentación y mantenimiento de vías que conectan la cabecera municipal con corregimientos aledaños y la construcción de alcantarillado y acueducto para ciertos corregimientos del municipio. Estas obras públicas son altamente valoradas por la ciudadanía, y representan avances en materia de PDET en una subregión –por no decir departamento– que no ha logrado impulsar el componente social y de desarrollo rural de la implementación del Acuerdo de Paz de 2016.

No obstante, en Condoto también se han recibido críticas respecto a los PDET. Por un lado, las comunidades afirman que los proyectos fueron entregados inconclusos (vías sin señalización, sin reductores de velocidad y a las que no se les hace mantenimiento periódico) o no funcionales (acueductos sin agua potable y alcantarillados que devuelven los residuos). Por otra parte, se critica la adjudicación de los proyectos PDET como un proceso hermético y cerrado a la participación, en el que el grupo motor no tiene mayor incidencia y en donde la administración municipal toma las decisiones unilateralmente.

Por último, las comunidades que habitan la cuenca del río Condoto señalan que la oferta PDET estuvo exclusivamente dirigida a los sectores carreteables del municipio y aseguran que sus caseríos fueron deliberadamente excluidos del despliegue de inversión social asociado a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.

b. Acciones para la supervisión de minería ilegal y la sustitución de actividades mineras ilícitas por proyectos productivos agropecuarios

La Defensoría del Pueblo evidenció, en Nóvita y Condoto, como ha venido reportando en todo el departamento de Chocó, la ausencia de un programa de sustitución de actividades mineras por vocación agrícola, como lo ha recomendado repetidas veces el Sistema de Alertas Tempranas, que pueda garantizar el sustento económico de las comunidades mineras una vez se adelanten las acciones voluntarias para sustituir las excavaciones ilegales por actividades económicas alternativas y rentables para los habitantes del campo<sup>13</sup>.

Actualmente, sobre todo en Nóvita, se está planteando un escenario en el que el único medio de subsistencia para ciertas poblaciones rurales está en el desarrollo de la minería (ilegal, en la mayoría de ocasiones). Las fuerzas de seguridad del Estado entran a los territorios rurales desconociendo esta realidad, por órdenes directas de entidades del orden nacional, y generan un ambiente de tensión con las comunidades, lo que se traduce en una reducción de legitimidad del accionar de la Fuerza Pública en el territorio. Esta enemistad que se tiende a generar entre Estado y población civil producto de la estigmatización del pequeño minero, y la eventual destrucción de material de minería, amenaza con que los grupos armados ilegales legitimen su presencia en los territorios de

---

<sup>13</sup> Es importante resaltar que la Defensoría del Pueblo también recomendó la formalización de pequeños mineros artesanales con el fin de abrir oportunidades de sostenibilidad económica para la población. Esta recomendación, no obstante, no se ha implementado, así lo indican los testimonios de las comunidades que desarrollan esta práctica tradicional en los sectores fluviales de los municipios advertidos.

vocación minera y se presenten a sí mismos como garantes de la supervivencia económica de las comunidades que dependen de las excavaciones.

En este punto se hace necesaria la implementación de un programa de sustitución de actividad minera ilegal que le provea a la población de los municipios de Condoto y Nóvita mecanismos de subsistencia económica a través de proyectos agrícolas y del encadenamiento productivo del sector rural con los mercados de centros poblados y municipios aledaños. Sin un programa de este tipo las comunidades se ven obligadas a permanecer bajo el yugo de las economías ilegales y es previsible, en caso de que continúe la estigmatización, que sigan presentándose tensiones entre fuerzas de seguridad del Estado y la población civil.

Todas las organizaciones y comunidades que dialogaron con la Defensoría del Pueblo durante el proceso de constatación de la Alerta Temprana estuvieron de acuerdo en la solicitud de ampliación de oferta de proyectos productivos agrícolas y de reforestación por parte del Estado para contrarrestar la crisis alimentaria y los impactos ambientales que ha generado la dependencia a la actividad minera ilegal. Al respecto, un líder comunitario fue contundente al sentenciar: “El oro se acaba. La minería no va a durar para siempre. Tenemos que buscar otras fuentes de sustento”.

No obstante, las iniciativas de sustitución de actividades mineras por proyectos agropecuarios parecen no avanzar, a pesar de que el Gobierno Nacional anunció a comienzos de 2024 un ambicioso plan de inversión para la agricultura y la seguridad alimentaria en el departamento del Chocó.

### c. Vacíos en materia de derechos sociales, infraestructura e inversión social

Por último, la Defensoría del Pueblo formuló dos recomendaciones específicas para la superación de vulnerabilidades sociales que fueron identificadas como necesarias dentro del análisis de riesgo efectuado en el marco de la Alerta Temprana. Primero, se recomendó crear, adecuar y dotar los centros y puestos de salud de las comunidades (sobre todo rurales) de los municipios; segundo, se solicitó aunar esfuerzos institucionales para lograr la construcción de la vía carretable que comunica a Nóvita con San José del Palmar (“Ruta del Chontaduro” y Puente de la Guayacana).

La primera recomendación, referente al servicio de salud, sus instalaciones y la contratación del personal, no ha tenido cumplimiento alguno por parte de la Gobernación del Chocó. De las ocho comunidades con quienes hizo constatación la Defensoría del Pueblo en territorios rurales, ninguna dispone actualmente de un puesto de salud funcional, con dotación, con insumos médicos y personal contratado.

Todas las comunidades visitadas carecen de una atención digna en materia del derecho a la salud, presentan serios problemas de infraestructura en sus instalaciones médicas (derrumbes, inundaciones, moho, humedades, entre otros) y deben recurrir día a día a pagar costosos trayectos de transporte hacia los centros urbanos más cercanos para recibir la atención en salud. Esto ha “producido muertes” —señala un líder comunitario del Alto

Tamaná— debido a que tampoco existe servicio de ambulancia y el transporte siempre debe ser “rebuscado” a través de la solidaridad de las personas de la comunidad.

La segunda recomendación tampoco presenta avances hasta el momento. De acuerdo con los voceros de los Consejos Comunitarios, la vía que conecta Nóvita con San José del Palmar continúa olvidada por la institucionalidad y en los últimos años ha venido construyéndose exclusivamente con esfuerzos de la población civil. Afirman que ni la Alcaldía ni la Gobernación se han hecho presentes de ningún modo en su construcción y tampoco han prestado ningún tipo de apoyo.

Para las comunidades del río Tamaná esta vía representa la solución a la crisis económica y la inseguridad alimentaria en la región. Argumentan que, en caso de formalizarse la construcción de la carretera —que ha tomado el nombre de la “Ruta del Chontaduro”<sup>14</sup>— se abriría un acceso entre Nóvita y el interior del país que podría significar nuevas oportunidades de ingreso y sustento. Por estas razones, en esta vía depositan las comunidades sus esperanzas de sostenibilidad y prosperidad económica. Señalan que han ido construyéndola comunitariamente, “con las uñas”, pero aseguran que debería existir un esfuerzo institucional adicional, sea por medio de la Alcaldía, la Gobernación, el Gobierno Nacional o lo proyectos PDET.

El propósito principal de construir la carretera está en encadenar comercialmente a Nóvita con otros centros poblados del interior del país donde actualmente sí existe demanda de productos agrícolas, y así crear y abrir nuevos mercados para la salida y venta de lo producido en el Alto Tamaná y el resto del municipio. Sin embargo, la carretera traería otro tipo de beneficios.

De acuerdo con los testimonios comunitarios, la carretera también 1) ampliaría la oferta social del estado (acceso a salud, educación y en general a oferta institucional); 2) resultaría positiva en términos de seguridad, al facilitar el acceso a conectividad, servicios públicos y de seguridad para así despojar al grupo armado ilegal de la hegemonía del territorio; y 3) generaría turismo, una industria que continúa virgen en esta subregión.

## 2.6 Acompañamiento del Ministerio Público a la Gestión Preventiva

Recomendaciones
A las <b>Personerías Municipales de Nóvita y Condoto</b> , para que realicen labores de monitoreo y verificaciones permanentes sobre la situación humanitaria referida en la presente Alerta Temprana, con énfasis en las organizaciones étnico-territoriales, sociales y comunitarias, organizaciones de víctimas y otros grupos vulnerables. Esto con el objetivo de garantizar los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal y seguridad con enfoque diferencial. De igual forma, realizar en sus respectivos municipios, el seguimiento al avance y cumplimiento

<sup>14</sup> Dentro de la “Ruta del Chontaduro” hay un punto al que la institucionalidad debe prestar especial atención. Se trata del “Puente de la Guayacana”, un paso construido comunitariamente por el que transitan vehículos, animales de carga y personas. Este puente fue construido a partir de saberes comunitarios y representa una amenaza para la vida de las personas que lo transitan. Se requiere de un estudio de viabilidad y de su formalización y construcción según estándares de seguridad que garanticen la integridad de las personas.

de las recomendaciones aquí contenidas y presentar mensualmente un informe analítico sobre estas materias a la Defensoría del Pueblo Regional Chocó.

A la **Procuraduría General de la Nación**, para que, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, realice seguimiento a las acciones implementadas por los entes competentes para conjurar los riesgos advertidos en la presente Alerta Temprana, de tal manera que se determine la viabilidad de iniciar o acelerar posibles procesos disciplinarios en los casos que lo ameriten. De igual forma, que lo propio proceda frente a la falta de respuesta de las entidades a los requerimientos de la Defensoría y/o en aquellos casos que no den respuesta a las recomendaciones referidos en el presente documento de advertencia.

A pesar de estar concernidas en las recomendaciones de las Alertas Tempranas, ninguna de las dos Personerías municipales le remitió información escrita a la Defensoría del Pueblo en el marco de la Alerta Temprana No. 027-21 para Condoto y Nóvita. No obstante, durante los procesos de constatación *in situ* de acciones por parte del equipo del Sistema de Alertas Tempranas, ambas Personerías municipales resultaron diligentes en el análisis, verificación y el seguimiento de la información de la gestión de riesgo institucional, como lo había recomendado la Defensoría del Pueblo.

La Personería de Condoto acompañó a la Defensoría del Pueblo en su constatación a lo largo del río Condoto (en donde se dedicó a tomar declaraciones y verificar el estado de inclusión en el Registro Único de Víctimas) y la Personería de Nóvita recibió a la Defensoría del Pueblo en la cabecera municipal y resultó útil para alimentar los análisis de desempeño institucional valorados en el marco del seguimiento. Buena parte de la información recabada por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo responde al apoyo y coordinación con las entidades locales de Ministerio Público.

### 3. Conclusiones

Como quedó expuesto a lo largo del documento, la Defensoría del Pueblo considera que la situación de riesgo para los habitantes de Condoto y Nóvita **PERSISTE**. En complemento, de acuerdo a la información aportada por las autoridades y a la constatación en terreno de las medidas adoptadas, se concluye que se presenta **BAJO CUMPLIMIENTO** de las recomendaciones por parte de las autoridades, resultado de la insuficiente gestión institucional ante el escenario de riesgo identificado. Se denota ausencia de oportunidad en la adopción de medidas, de coordinación institucional para atender los riesgos expuestos y de capacidad técnica para la implementación de las recomendaciones emitidas por el Sistema de Alertas Tempranas.

A partir del análisis de la gestión institucional, la Defensoría del Pueblo esboza las siguientes conclusiones:

- 1) La Defensoría del Pueblo considera que el escenario de riesgo para los municipios de Condoto y Nóvita, luego de la emisión de la alerta temprana No. 027-21, se ha

agravado y se han profundizado los repertorios de violencia, afectando gravemente los derechos humanos de la población civil. En igual sentido, se han presentado graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario. Este agravamiento evidencia una respuesta estatal que ha sido poco oportuna y sin capacidad eficaz de contención frente a la evolución del riesgo advertido.

Lo anterior se justifica en que el escenario de disputa entre ELN y EGC se ha sostenido en tiempo y espacio, dejando graves consecuencias no sólo para la población civil, sino también para los territorios donde se desarrollan prácticas ancestrales y culturales. Estas afectaciones se han manifestado en la proliferación de confinamientos, desplazamientos, el reclutamiento forzado, las amenazas a personas defensoras de derechos humanos, entre otras conductas vulneratorias, en los municipios advertidos en la Alerta Temprana.

- 2) En materia de disuasión de riesgo, en términos generales, algunas recomendaciones se han implementado parcialmente y otras no tienen avance alguno en su implementación. A saber:
  - i. La Fuerza Pública no ha sido efectiva contrarrestando a los grupos armados ilegales y todavía no ejerce una presencia sostenida en los territorios advertidos por la Defensoría del Pueblo tanto en los sectores carreteables como en los ríos focalizados en Condoto y Nóvita.
  - ii. No existe una presencia de la Armada Nacional en los territorios focalizados, a pesar del carácter estrictamente fluvial de la geografía de los ríos Condoto, Cajón, Tamaná, entre otros.
  - iii. La Fuerza Pública carece de recurso humano (y en ocasiones también de equipamiento suficiente) para desarrollar sus labores de seguridad.
- 3) El ambiente generalizado de zozobra, desconfianza y deslegitimación institucional ha derivado en que las comunidades no denuncien las conductas vulneratorias y los repertorios de violencia de los grupos armados ilegales. Ni la Fiscalía General de la Nación ni la Policía Nacional comunicaron acciones para mejorar la confianza institucional e incentivar la denuncia ciudadana en condiciones de seguridad. Este escenario obstaculiza las investigaciones e interrumpe los procesos de acceso a la justicia. Esto muestra una falta de eficacia institucional y ausencia de estrategias coordinadas para fortalecer la confianza ciudadana y garantizar el acceso oportuno a la justicia.
- 4) La recomendación en materia de protección de personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas, en términos generales, no presenta ningún cumplimiento hasta el momento. Por un lado, la Gobernación del Chocó no presentó ninguna acción en este tema. Por el otro lado, las Alcaldías de los municipios presentan la socialización del diseño de las rutas de protección individual y colectiva, pero no exponen ninguna acción que se materialice en la identificación temprana de riesgos. Esta situación refleja una clara falta de coordinación interinstitucional y una respuesta ineficaz frente a un componente



crítico de la alerta. La ausencia de acciones en tiempo oportuno compromete la protección de liderazgos en riesgo.

Adicionalmente, la UNP debe ampliar su gestión de riesgo hacia las comunidades focalizadas, en concordancia con lo dispuesto en el decreto 1581 de 2017 en cuanto a la territorialización de la oferta de protección. Las acciones de la Unidad en el marco de la Alerta Temprana No. 027 de 2021 se han concentrado en solicitar verticalmente, vía nación-territorio, la individualización de situaciones de riesgo que tengan registradas las alcaldías, las personerías y la gobernación a nivel local.

- 5) Frente a la prevención de reclutamiento, uso y utilización de NNA por parte de grupos armados ilegales, ni la Alcaldía de Nóvita, ni la CIPRUNNA, ni la Gobernación del Chocó, reportan alguna acción propia de prevención que sea efectiva en la mitigación de los riesgos. Se presenta iniciativas aún incipientes de la Alcaldía de Condoto (que todavía están en etapa de formulación) y la oferta institucional regular del ICBF, para desarrollar el componente de prevención temprana de la política pública de prevención de reclutamiento, pero esto ignora el componente de inminencia que describe la Alerta y refleja una respuesta institucional desarticulada y tardía, con baja eficacia para contener uno de los riesgos más graves identificados por la Alerta.

Como medidas de prevención urgente y prevención en protección (CONPES 3673), no se presentan acciones para evitar el uso y el reclutamiento. Este punto, más allá de ser una evidencia de la falta de despliegue de la oferta institucional, denota la ausencia de una estrategia a nivel local, impulsada por las entidades responsables, para dar frente a la amenaza del reclutamiento de NNA (a pesar de que en 2024 continúan consumándose los riesgos).

- 6) Resulta fundamental que la institucionalidad active sus herramientas de prevención y protección en materia de prevención de consumo de SPA, especialmente en niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Sin una gestión del riesgo oportuna y eficaz en esta materia, la continuidad de las amenazas (expendio ilegal, SPA como mecanismos de utilización de NNA) puede conducir a un escenario de crisis en salud pública y privación de derechos de la niñez.
- 7) Los planes de contingencia municipales están aprobados para la vigencia 2024. El plan de Contingencia departamental continúa evidenciado falencias y no ha logrado concretarse como herramienta humanitaria operativa. Esto refleja una débil capacidad de coordinación entre niveles de gobierno y una gestión ineficaz en la planeación del riesgo, que impide una respuesta integral y oportuna frente a emergencias humanitarias. La Defensoría resalta la importancia de la actualización inmediata y el diseño correcto de las herramientas de prevención urgente, al significar que los vacíos de planificación de las administraciones en este sentido tienen repercusiones directas en la exacerbación de los escenarios de riesgo, que en el caso preciso de los municipios de Condoto y Nóvita ya están plenamente consumados.

- 8) Existe un desconocimiento generalizado por parte de las comunidades étnicas locales acerca del funcionamiento, el estado y los avances de los Programas de Desarrollo con enfoque territorial (PDET). Las comunidades exigen que se les informe sobre la priorización de proyectos, su ejecución y se les haga una rendición de cuentas sobre los PDET pasados ocho años del comienzo de su implementación. Para esto, aseguran haber solicitado reiteradamente acercamientos con la Agencia para la Renovación del Territorio (ART), que según sus testimonios no han sido atendidos.
- 9) En el municipio de Nóvita es de público conocimiento el fracaso de ciertos proyectos PDET. El grupo motor, en esa línea, señala haber denunciado públicamente la pérdida de inversiones mayores a los 16.000 millones de pesos. En Condoto, por el contrario, el balance de los PDET tiende a ser positivo. No obstante, la comunidad critica el proceso de los PDET como cerrado a la participación, centralizado por la Alcaldía, y asimétrico en la atención de las diferentes comunidades.

En Nóvita, además, algunas obras de vital importancia, que podrían convertirse en motores de desarrollo y en una oportunidad para iniciar la construcción de confianza en el territorio —como la denominada “Ruta del Chontaduro”— no presentan ningún avance. Es fundamental que el gobierno departamental y las entidades nacionales competentes las identifiquen, prioricen y ejecuten, debido a su alto valor estratégico para la región.

Por último, a falta de un programa de sustitución de actividad minera ilícita en los municipios, desde la emisión de la Alerta Temprana continúa la estigmatización institucional del pequeño minero (que en ocasiones ha derivado en destrucción de material de minería) a lo largo de la subregión del San Juan. Esto ha generado el surgimiento de tensiones sociales entre entidades estatales y comunidades rurales y ha profundizado la deslegitimación de las fuerzas de seguridad del Estado, al ser la minería el único medio de sustento para gran parte de la población local.

- 10) No se ha producido cumplimiento alguno de las recomendaciones dirigidas a la superación de vulnerabilidades sociales en las comunidades de Condoto y Nóvita. Por un lado, el derecho a la salud continúa siendo vulnerado para las comunidades rurales que no cuentan con personal médico contratado, instalaciones de servicio, dotación, insumos médicos, ni ambulancia.

Por el otro, la recomendación referente a la construcción de la carretera que conecta Nóvita con San José del Palmar y el interior del país, no ha tenido ningún tipo de avance y sigue representando una oportunidad de desarrollo local no aprovechada que está estrechamente ligada a la privación de derechos sociales, económicos y de seguridad.

#### 4. Recomendaciones

Con base en lo expuesto anteriormente, y teniendo en cuenta la responsabilidad del Ministerio del Interior de articular a las entidades nacionales y autoridades territoriales de manera rápida, oportuna y con la debida diligencia, se le exhorta para que realice las actuaciones pertinentes que permitan el goce efectivo de derechos de las comunidades en riesgo identificadas en el documento de advertencia, haciendo énfasis en las comunidades afrocolombianas e indígenas con riesgos consumados en el marco de la AT No. 27-21, y, en caso de que se falte a ellas, se promuevan los procesos disciplinarios y penales a que haya lugar en coordinación con la Procuraduría General de la Nación.

Así mismo, en virtud de lo consagrado en el Decreto 2124 de 2017 se insta a las instituciones concernidas en el presente informe a la adopción de medidas integrales efectivas para superar, disuadir, alejar o mitigar el riesgo y garantizar la plena vigencia de los Derechos Humanos de la población civil. En ese sentido se reiteran las recomendaciones emitidas en la Alerta Temprana 027-21 y se resaltan las medidas de control y de seguimiento a las mismas. Por esta razón, se recomienda:

#### Acceso a la justicia

##### RECOMENDACIÓN No. 1

<b>Tipo de Acción Recomendada:</b>	Acceso a la justicia
<b>Entidad Principal Concernida:</b>	Fiscalía General de la Nación
<b>Entidades Asociadas:</b>	Policía Nacional de Colombia
<b>Recomendación:</b>	<p>Adelantar en condiciones de seguridad y confidencialidad, jornadas rurales de recepción de denuncias o el despliegue de medios virtuales de denuncia sobre conductas punibles que puedan estar relacionadas con el escenario de riesgo referido en la Alerta Temprana No. 027 de 2021 y el presente Informe de Seguimiento. En caso de decidirse por el despliegue de mecanismos virtuales, se sugiere contemplar las condiciones de conectividad rural y el enfoque territorial.</p> <p>Todo lo anterior con el ánimo de que dichas investigaciones puedan esclarecer, identificar y judicializar a los responsables de los hechos victimizantes de los que ha sido objeto la población afrocolombiana e indígena de la subregión.</p>

<b>Focalización territorial:</b>	Todo el territorio identificado en riesgo
<b>Focalización poblacional:</b>	Todos los grupos poblacionales identificados en riesgo, en especial comunidades indígenas y afrocolombianas
<b>Tiempo estimado de Implementación:</b>	Desde el momento de emisión hasta tres meses: Acciones de protección urgente.

## Prevención y protección

### RECOMENDACIÓN No. 2

<b>Tipo de Acción Recomendada:</b>	Prevención y protección
<b>Entidad Principal Concernida:</b>	Consejería Comisionada de Paz
<b>Entidades Asociadas:</b>	N/A
<b>Recomendación:</b>	<p>A la <b>Consejería Comisionada de Paz</b>, ampliar el despliegue territorial de su estrategia de contingencia para la desactivación de las municiones sin explosionar conocidas e identificadas geográficamente por las comunidades rurales del Chocó. Esta estrategia debe ser impulsada bajo un enfoque de acción sin daño, según el cual las autoridades se abstengan de poner en riesgo o de visibilizar ante los grupos armados ilegales a líderes/as y/o comunidades que denuncien la presencia de los artefactos explosivos en su territorio.</p> <p>Asimismo, contemplar la posibilidad de ampliar las labores de desminado humanitario hacia los municipios del Chocó donde todavía no ha comenzado el proceso de descontaminación, todo esto en cumplimiento de la Convención de Ottawa de 1997.</p>
<b>Focalización territorial:</b>	Todo el territorio identificado en riesgo
<b>Focalización poblacional:</b>	Comunidades indígenas y afrocolombianas rurales de Condoto y Nóvita
<b>Tiempo estimado de Implementación:</b>	Desde el momento de emisión hasta tres meses: acciones de protección urgente.

### RECOMENDACIÓN No. 3

<b>Tipo de Acción Recomendada:</b>	Prevención y protección
<b>Entidad Principal Concernida:</b>	Consejería Presidencial para los Derechos Humanos
<b>Entidades Asociadas:</b>	Gobernación del Chocó y Alcaldías Municipales de Condoto y Nóvita
<b>Recomendación:</b>	<p>A la <b>Consejería Presidencial para los Derechos Humanos</b>, como secretaria técnica de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento (CIPRUNNA), remitir al Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo un balance sobre los avances y el funcionamiento de los Equipos de acción inmediata promovidos por la Consejería para la prevención del reclutamiento y/o la vinculación. Para el cumplimiento de la recomendación, se insta a la <b>Gobernación del Chocó</b>, la entrega de la información específica sobre los Equipos de Acción Inmediata (EAI) funcionales en el departamento, con énfasis en los municipios de Condoto y Nóvita.</p> <p>Incluir en dicho balance cuáles han sido sus resultados, en dónde están operando, qué avances en materia de prevención han alcanzado, cuántos casos han tramitado, entre otros componentes que se consideren pertinentes. Ampliar la información a los municipios de Condoto y Nóvita.</p>
<b>Focalización territorial:</b>	Todo el territorio identificado en riesgo
<b>Focalización poblacional:</b>	Niños, niñas y adolescentes
<b>Tiempo estimado de Implementación:</b>	Desde el momento de emisión hasta tres meses: acciones de protección urgente.

### RECOMENDACIÓN No. 4

<b>Tipo de Acción Recomendada:</b>	Prevención y protección
<b>Entidad Principal Concernida:</b>	Gobernación del Chocó

<b>Entidades Asociadas:</b>	Alcaldías de Condoto y Nóvita. Planteles educativos públicos de los dos municipios.
<b>Recomendación:</b>	<p>A la <b>Gobernación del Chocó</b>, formular y ejecutar procesos de capacitación y sensibilización con los estudiantes y con la comunidad en general sobre prevención de consumo de sustancias psicoactivas, especialmente en niños, niñas, adolescentes y jóvenes.</p> <p>Para ello, se insta a <b>las secretarías de educación municipales</b> y los rectores de los planteles educativos de los municipios de Condoto y Nóvita a aportar la información relevante y proponer los cronogramas en los que estas acciones podrían llevarse a cabo.</p>
<b>Focalización territorial:</b>	Todo el territorio identificado en riesgo
<b>Focalización poblacional:</b>	Niños, niñas y adolescentes. Padres y madres de familia.
<b>Tiempo estimado de Implementación:</b>	Desde el momento de emisión hasta seis meses: Acciones de prevención temprana, algunas medidas de superación de vulnerabilidades.

#### RECOMENDACIÓN No. 5

<b>Tipo de Acción Recomendada:</b>	Prevención y protección
<b>Entidad Principal Concernida:</b>	<b>Gobernación del Chocó</b>
<b>Entidades Asociadas:</b>	Alcaldías de Condoto y Nóvita. Planteles educativos públicos de los dos municipios.
<b>Recomendación:</b>	<p>A la <b>Gobernación del Chocó</b>, llevar a cabo procesos de capacitación y sensibilización con la comunidad en general, sobre violencias basadas en género, violencia sexual y trata de personas, para su reconocimiento, prevención, tratamiento y asistencia a las víctimas, con perspectiva de género y de derechos humanos.</p> <p>Para ello, se insta a <b>las secretarías de educación municipales</b> y los rectores de los planteles educativos de los municipios de Condoto y Nóvita, a aportar la información relevante y</p>



	proponer los cronogramas en los que estas acciones podrían llevarse a cabo.
<b>Focalización territorial:</b>	Todo el territorio identificado en riesgo
<b>Focalización poblacional:</b>	Niños, niñas y adolescentes. Padres y madres de familia.
<b>Tiempo estimado de Implementación:</b>	Desde el momento de emisión hasta seis meses: Acciones de prevención temprana, algunas medidas de superación de vulnerabilidades.

### Acción humanitaria integral

#### RECOMENDACIÓN No. 6

<b>Tipo de Acción Recomendada:</b>	Acción humanitaria integral
<b>Entidad Principal Concernida:</b>	Alcaldías de Condoto y Nóvita
<b>Entidades Asociadas:</b>	Gobernación del Chocó y Unidad para las Víctimas
<b>Recomendación:</b>	<p>A las <b>Alcaldías de Condoto y Nóvita y la Gobernación del Chocó</b>, valorar la necesidad de proceder con la entrega de ayudas humanitarias inmediatas (y/o de emergencia, conjunto con la <b>Unidad para Víctimas</b>) en los sectores rurales de Condoto y Nóvita en los casos que se requiera.</p> <p>Para esto, se recomienda hacer una misión de verificación conjunta, en coordinación con la Unidad para las Víctimas, para activar los mecanismos de atención a la población víctima del conflicto armado en los municipios.</p>
<b>Focalización territorial:</b>	Todo el territorio identificado en riesgo
<b>Focalización poblacional:</b>	Comunidades indígenas y afrocolombianas rurales de Condoto y Nóvita
<b>Tiempo estimado de Implementación:</b>	Desde el momento de la emisión hasta un mes: acciones de atención humanitaria inmediata.

Acciones de política pública para la superación de vulnerabilidades y factores de desprotección

RECOMENDACIÓN No. 7

<b>Tipo de Acción Recomendada:</b>	Acciones de política pública para la superación de vulnerabilidades y factores de desprotección
<b>Entidad Principal Concernida:</b>	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
<b>Entidades Asociadas:</b>	Gobernación del Chocó y Departamento Nacional de Planeación
<b>Recomendación:</b>	<p>Ala <b>Gobernación del Chocó</b>, formular e implementar con carácter de urgencia una política pública de seguridad alimentaria para el departamento del Chocó, con enfoque territorial diferencial para la subregión del San Juan, particularmente los municipios de Condoto y Nóvita.</p> <p>Esta política territorial se insta a que dialogue con las estrategias vigentes de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONPES 113 de 2008) y el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Asimismo, se exhorta que no esté limitada a un plan de transferencias monetarias condicionadas como el “Plan de Choque Contra el Hambre” y adopte un enfoque de desarrollo rural, recuperación de la vocación agropecuaria, dieta saludable y encadenamiento productivo y comercial.</p> <p>Para ello, se sugiere que el <b>Departamento Nacional de Planeación</b> y el <b>Ministerio de Agricultura</b> puedan brindar orientación técnica a la Gobernación.</p>
<b>Focalización territorial:</b>	Todo el territorio identificado en riesgo
<b>Focalización poblacional:</b>	Comunidades indígenas y afrocolombianas rurales de Condoto y Nóvita
<b>Tiempo estimado de Implementación:</b>	Hasta nueve meses: Medidas para la superación de vulnerabilidades

RECOMENDACIÓN No. 8

<b>Tipo de Acción Recomendada:</b>	Acciones de política pública para la superación de vulnerabilidades y factores de desprotección
------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Entidad Principal Concernida:</b>	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
<b>Entidades Asociadas:</b>	Gobernación del Chocó
<b>Recomendación:</b>	<p>Al <b>Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural</b> ampliar la oferta de proyectos productivos agropecuarios para las comunidades rurales de los municipios de Condoto y Nóvita, con el fin de mitigar la crisis alimentaria producida por los confinamientos y la minería ilegal en la subregión. Esta ampliación puede enmarcarse en el “paquete de medidas para impulsar la agricultura en el Chocó” que anunció el Gobierno Nacional en enero de 2024 o en los programas de desarrollo del campo que actualmente debe desarrollar la <b>Gobernación</b>. Para lo último, gestionar directamente con la Gobernación cómo puede apoyar la ampliación de oferta de proyectos productivos y agropecuarios.</p> <p>El propósito está en restablecer la vocación agraria, aunar por el encadenamiento productivo y comercial con los grandes centros poblados, recuperar los cultivos y prácticas agrícolas tradicionales y el pancoger, además de cortar lazos de dependencia que se hayan podido generar con las economías ilícitas impuestas por los grupos armados ilegales.</p>
<b>Focalización territorial:</b>	Todo el territorio identificado en riesgo
<b>Focalización poblacional:</b>	Comunidades indígenas y afrocolombianas rurales de Condoto y Nóvita
<b>Tiempo estimado de Implementación:</b>	Hasta nueve meses: Medidas para la superación de vulnerabilidades

#### RECOMENDACIÓN No. 9

<b>Tipo de Acción Recomendada:</b>	Acciones de política pública para la superación de vulnerabilidades y factores de desprotección
<b>Entidad Principal Concernida:</b>	Agencia para la renovación del territorio
<b>Entidades Asociadas:</b>	N/A
<b>Recomendación:</b>	A la <b>Agencia para la Renovación del Territorio (ART)</b> , programar jornadas de socialización del estado y los avances

	<p>de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en los municipios de la subregión del San Juan, con encuentros específicos para tratar el tema de Nóvita y Condoto. Estas jornadas de socialización deben ser convocadas con tiempo y difusión suficiente para garantizar la participación activa de las organizaciones sociales y las comunidades étnicas que habitan sectores rurales alejados de las cabeceras municipales.</p> <p>Presentar qué proyectos se han ejecutado en cada municipio, cuáles están en ejecución, cuáles son los avances, el plan de acción, cronograma y los obstáculos de los PDET en la subregión. Abrir el espacio para la retroalimentación de las comunidades y las personas defensoras de derechos humanos.</p>
<b>Focalización territorial:</b>	Todo el territorio identificado en riesgo
<b>Focalización poblacional:</b>	Todos los grupos poblacionales identificados en riesgo
<b>Tiempo estimado de Implementación:</b>	Desde el momento de emisión hasta seis meses: acciones de prevención temprana, algunas medidas de superación de vulnerabilidades.

#### RECOMENDACIÓN No. 10

<b>Tipo de Acción Recomendada:</b>	Acciones de política pública para la superación de vulnerabilidades y factores de desprotección
<b>Entidad Principal Concernida:</b>	Gobernación del Chocó
<b>Entidades Asociadas:</b>	Instituto Nacional de Vías - Invías, Alcaldía Municipal de Nóvita
<b>Recomendación:</b>	<p>A la <b>Gobernación del Chocó</b>, para que realice todas las gestiones necesarias a nivel local, departamental y nacional para que se logre la construcción de la vía carretable que comunique a Nóvita con San José del Palmar (énfasis en la “Ruta del Chontaduro” y el Puente de la Guayacana), de tal forma que se mejoren las condiciones de acceso y comunicación para las comunidades, y para los agricultores para la producción, movilización y/o transporte de sus productos con fines de comercialización en otros mercados.</p> <p>Para lo anterior, entrar en diálogo con el <b>Instituto Nacional de Vías (Invías)</b> para revisar posibilidades de financiamiento y</p>

	ejecución. De igual manera, verificar, dentro de las gestiones realizadas, junto con la <b>Alcaldía de Nóvita</b> , la posibilidad de su inclusión en los Programas de Desarrollo Territorial (PDET).
<b>Focalización territorial:</b>	Todo el territorio identificado en riesgo
<b>Focalización poblacional:</b>	Todos los grupos poblacionales identificados en riesgo
<b>Tiempo estimado de Implementación:</b>	Desde el momento de emisión hasta seis meses: acciones de prevención temprana, algunas medidas de superación de vulnerabilidades.

## Gestiones del Ministerio Público

### RECOMENDACIÓN No. 11

<b>Tipo de Acción Recomendada:</b>	Gestiones del Ministerio Público
<b>Entidad Principal Concernida:</b>	Procuraduría General de la Nación
<b>Entidades Asociadas:</b>	N/A
<b>Recomendación:</b>	A la <b>Procuraduría General de la Nación</b> , para que, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, y teniendo en cuenta que la presente valoración de la Defensoría del Pueblo expone que el riesgo persiste y hay un bajo cumplimiento de las recomendaciones, realice seguimiento a las acciones implementadas por los entes competentes para conjurar los riesgos advertidos en la Alerta Temprana 027-21, de tal manera que se determine la viabilidad de iniciar o acelerar procesos disciplinarios en los casos que amerite.
<b>Focalización territorial:</b>	Todo el territorio identificado en riesgo
<b>Focalización poblacional:</b>	Todos los grupos poblacionales identificados en riesgo
<b>Tiempo estimado de Implementación:</b>	Cumplimiento inmediato y permanente con posible observación mensual del SAT

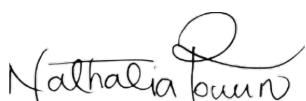
### RECOMENDACIÓN No. 12

<b>Tipo de Acción Recomendada:</b>	Gestiones del Ministerio Público
<b>Entidad Principal Concernida:</b>	Personerías Municipales de Condoto y Nóvita
<b>Entidades Asociadas:</b>	N/A
<b>Recomendación:</b>	A la <b>Personerías Municipales de Condoto y Nóvita</b> para que, en uso de sus facultades como Ministerio Público, realicen el respectivo acompañamiento a las personas y comunidades objeto del accionar de los grupos armados ilegales, impulsando la garantía de los derechos de las familias de las comunidades y hagan el respectivo seguimiento del cumplimiento de las responsabilidades de las entidades requeridas en la Alerta Temprana 027-21 y en el presente informe de seguimiento.
<b>Focalización territorial:</b>	Todo el territorio identificado en riesgo
<b>Focalización poblacional:</b>	Todos los grupos poblacionales identificados en riesgo
<b>Tiempo estimado de Implementación:</b>	Cumplimiento inmediato y permanente

Así mismo, en virtud de lo consagrado en el Decreto 2124 de 2017 se insta a las instituciones concernidas en el presente informe a la adopción de medidas integrales efectivas para superar, disuadir, alejar o mitigar el riesgo y garantizar la plena vigencia de los Derechos Humanos de la población civil.

Para los efectos pertinentes, se agradece que toda respuesta sea remitida a la Defensoría del Pueblo al correo electrónico [delegadasat@defensoria.gov.co](mailto:delegadasat@defensoria.gov.co) y/o a la dirección postal Calle 55 #10-32 en Bogotá D.C.

Cordialmente,

  
**NATHALIA ROMERO FIGUEROA**  
Defensora Delegada para la Prevención del  
Riesgo de Violaciones de DDDH y DIH  
Sistema de Alertas Tempranas (SAT)

Revisó y Aprobó: Nathalia Romero Figueroa Defensora Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones de Derechos Humanos y DIH

Archivado en: Alerta Temprana No. 027-21 para Condoto y Nóvita, departamento del Chocó.

Calle 55 # 10-32 · Sede Nacional · Bogotá, D.C.

PBX: (57) (601) 3144000 · Línea Nacional: 01 8000 914814

[www.defensoria.gov.co](http://www.defensoria.gov.co)